

Pérez-Llorca

ANUARIO **2025** YEAR IN REVIEW

# Penal Económico e Investigaciones

*White Collar Crime and  
Investigations*

---

2025

Pérez-Llorca

ANUARIO **2025** YEAR IN REVIEW

# Penal Económico e Investigaciones

*White Collar Crime and  
Investigations*

---

2025

# Índice

1. Introducción	4
2. Novedades normativas	6
3. Novedades jurisprudenciales	13
4. Publicaciones de organismos oficiales	37
5. Conocimiento Jurídico	39
5.1 Notas jurídicas enviadas a cliente	39
5.2 Artículos Doctrinales	39
5.3 Menciones en Prensa	40
5.4 Actividad docente	40
5.5 Eventos	41
6. Reconocimientos	43
6.1 Despacho	43
6.2 Abogados	43
7. Nuestro equipo	44

# Contents

1. Introduction	4
2. Regulatory developments	6
3. Case law developments	13
4. Publications by official bodies	37
5. Legal Knowledge	39
5.1 Legal Briefings sent to clients	39
5.2 Academic Articles	39
5.3 In the Press	40
5.4 Academic Activities	40
5.5 Events	41
6. Recognition	43
6.1 The Firm	43
6.2 Lawyers	43
7. Our team	44

## 1. Introducción

En 2025, la agenda penal ha estado dominada por dos vectores claros: por un lado, el impacto inmediato de reformas orientadas a la eficiencia del sistema de Justicia, con la entrada en vigor de la LO 1/2025 y sus efectos prácticos en la tramitación y organización judicial. Por el otro, la consolidación de un marco regulatorio que refuerza la prevención y detección interna de irregularidades, con la puesta en marcha efectiva de la Autoridad Independiente de Protección del Informante (“A.A.I.” o “AIPI”), llamada a desempeñar un papel central en la aplicación real de la Ley 2/2023.

En paralelo, el derecho penal económico ha seguido condicionado por el entorno europeo e internacional –especialmente el régimen de medidas restrictivas y sanciones– y por una litigación cada vez más intensa en materia de responsabilidad corporativa y cumplimiento normativo.

El primer gran eje del año ha sido la LO 1/2025, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, cuyo despliegue está empezando a sentirse en la práctica diaria, ya que introduce cambios organizativos y ajustes relevantes en la tramitación penal, con especial incidencia en la fase de preparación del juicio y en los incentivos hacia soluciones de terminación anticipada. En la misma línea, la Fiscalía General del Estado ha fijado criterios uniformes para la audiencia preliminar del procedimiento abreviado, reforzando su función depuradora y, sobre todo, su efecto preclusivo sobre cuestiones previas y controversias probatorias.

En el plano sustantivo, 2025 ha estado marcado por reformas penales con claro anclaje internacional y por ajustes internos puntuales de política criminal. Destaca, por su alcance y por el impacto inmediato en el *compliance* corporativo, el impulso de la reforma del Código Penal para tipificar la vulneración y la elusión de las medidas restrictivas de la Unión Europea, en transposición de la Directiva (UE) 2024/1226, ya que el Gobierno aprobó el anteproyecto el pasado mes de marzo de 2025 y remitió el proyecto al Congreso en octubre, con el objetivo de pasar de un modelo esencialmente administrativo a un marco con respuesta penal y previsión de imputación también para personas jurídicas.

En el terreno jurisdiccional, 2025 ha dejado resoluciones especialmente relevantes por su proyección pública. Entre ellas, ha destacado la sentencia condenatoria contra el ex Fiscal General del Estado dictada por la Sala Segunda por revelación de datos/informaciones reservadas en un asunto que ha generado un debate mediático e institucional muy intenso sobre los límites del deber de reserva en comunicaciones institucionales, el estándar probatorio y el equilibrio entre información pública y garantías del afectado. Al margen del “ruido” externo, la utilidad del fallo está en cómo obligan a precisar qué se entiende por “información reservada”, cuándo se consume la revelación y qué exigencias probatorias permiten sostener una condena sin erosionar la presunción de inocencia.

El otro bloque que ha ganado centralidad, y que seguirá marcando 2026, es la responsabilidad penal de la persona jurídica y la acreditación de la eficacia del *compliance*. La práctica reciente (con es-

## 1. Introduction

In 2025, the criminal justice agenda was dominated by two clear trends: firstly, the immediate impact of reforms aimed at improving the efficiency of the justice system, with the entry into force of Organic Law 1/2025 and its practical effects on judicial proceedings and organisation. And secondly, the consolidation of a regulatory framework that reinforces the prevention and internal detection of irregularities, with the effective implementation of the Independent Authority for the Protection of Whistleblowers (“A.A.I.” or “AIPI”), which has been tasked with taking on a central role in the practical application of Law 2/2023.

In parallel, economic criminal law has continued to be influenced by the European and international landscape – particularly the regime of restrictive measures and sanctions – and by increasingly intense litigation in the area of corporate liability and regulatory compliance.

The first major milestone of the year was Organic Law 1/2025 on measures for the efficiency of the Public Service of Justice, the implementation of which is beginning to be felt in daily practice, as it introduces organisational changes and significant adjustments to criminal proceedings, with a particular impact on the trial preparation phase and incentives for early settlement. Along the same lines, the State Attorney General’s Office has established uniform criteria for preliminary hearings in abbreviated criminal proceedings, reinforcing their gatekeeping function and, above all, their effect in resolving preliminary issues and evidentiary disputes.

In substantive terms, 2025 was marked by criminal law reforms with a clear international focus and by specific internal adjustments to criminal law policy. Of particular note, due to its scope and immediate impact on corporate compliance, is the push to reform the Criminal Code to criminalise the breach and circumvention of European Union restrictive measures, in transposition of Directive (EU) 2024/1226, as the Government approved the preliminary draft law in March 2025 and submitted the draft to Congress in October, with the aim of moving from an essentially administrative model to a framework with criminal penalties and the possibility of prosecution for legal persons as well.

In the jurisdictional sphere, 2025 has produced particularly significant judgments due to their public profile. Among these, the conviction of the former Attorney General by the Second Chamber for the disclosure of confidential data/information in a case that has generated intense media and institutional debate on the limits of the duty of confidentiality in institutional communications, the standard of proof, and the balance between public information and the guarantees of the injured party is particularly noteworthy. Aside from the external “noise”, the usefulness of the judgment lies in how it forces us to clarify what is meant by “confidential information”, when disclosure takes place, and what evidentiary requirements allow a conviction to be upheld without eroding the presumption of innocence.

The other topic that has come to the fore, and which will continue to do so in 2026, is the criminal liability of legal persons and the verification of the effectiveness of compliance. Recent prac-

pecial protagonismo a resoluciones del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional) ha terminado de consolidar un mensaje nítido: el “*compliance* cosmético” no neutraliza la imputación corporativa si no se demuestra implantación real, autonomía de las funciones de control, trazabilidad, monitorización y reacción efectiva frente a “red flags”. En ese marco, cobra especial importancia la prueba pericial de *compliance*, ya que no basta una pericia de catálogo, sino que se impone una aplicada al caso concreto y de alta sofisticación técnica.

En paralelo, 2025 ha sido un año decisivo en el ámbito de las investigaciones internas y canales de denuncia por la entrada en funcionamiento de la A.A.I. Finalmente, se aprobó su Estatuto orgánico (mediante el “**Real Decreto 1101/2024**”) y, posteriormente, se fijó formalmente su puesta en funcionamiento el pasado 1 de septiembre de 2025. Ya en fase operativa, se han adoptado medidas instrumentales relevantes (como la habilitación de sede electrónica y su despliegue organizativo), anticipando un escenario en el que los expedientes sancionadores y los criterios interpretativos de la A.A.I. empezarán a condicionar el diseño y la defensa de sistemas internos de información, investigaciones y garantías de protección del informante.

Desde una perspectiva internacional, el régimen de sanciones ha seguido expandiéndose y sofisticándose, con impacto directo en riesgo penal y en investigaciones internas transfronterizas. En el ámbito de la Unión Europea, 2025 vio la adopción de paquetes adicionales contra Rusia (por ejemplo, el 16<sup>º</sup> en febrero y el 18<sup>º</sup> en julio), y a comienzos de 2026 se han conocido propuestas para nuevas rondas (ya se habla del 20.º paquete), con especial foco en energía, finanzas, elusión y “shadow fleet”. Esto incrementa la exposición penal potencial en operaciones de comercio internacional, logística, financiación, servicios profesionales y tecnología, elevando el estándar de diligencia exigible a empresas y directivos.

Finalmente, el vector Venezuela vuelve a situarse como una zona de incertidumbre regulatoria, con relevancia penal y de *compliance*. Por un lado, la UE ha mantenido o renovado sus medidas restrictivas vinculadas a la situación política y de derechos humanos. Por otro, en EE.UU. se han producido movimientos recientes en el régimen de licencias/autoridades de OFAC respecto de actividades petroleras y gasísticas, con un entorno altamente dinámico y sensible a decisiones de política exterior, lo que obliga a extremar los análisis de compatibilidad (UE/EE.UU.) y la trazabilidad contractual y financiera de operaciones.

En conclusión, el periodo de 2025 y el inicio de 2026 consolidan una agenda penal marcada por (i) el aterrizaje operativo de la LO 1/2025 y sus efectos procesales; (ii) la presión regulatoria internacional (en materia de sanciones) y su probable traducción en tipos penales específicos y mayor litigación en materia de elusión; (iii) la maduración de la A.A.I. y su impacto directo sobre investigaciones internas; y (iv) una jurisprudencia cada vez más exigente con la responsabilidad penal corporativa y la prueba de la eficacia del *compliance*.

tice (with special emphasis on judgments by the Supreme Court and the National High Court) has established a clear message: “cosmetic compliance” does not neutralise corporate liability if real implementation, autonomy of control functions, traceability, monitoring, and an effective response to “red flags” are not demonstrated. In this context, expert evidence of compliance takes on special importance, since generic expertise is not enough; rather, expertise that is applied to the specific case and has a high degree of technical sophistication is required.

In parallel, 2025 has been a decisive year in the field of internal investigations and whistleblowing channels due to the entry into operation of the A.A.I. Finally, its Organic Statute was approved (by “**Royal Decree 1101/2024**”), and its entry into operation was subsequently officially set for 1 September 2025. Now that it is operational, relevant instrumental measures have been adopted (such as the establishment of an electronic platform and its organisational deployment), in anticipation of a scenario in which the A.A.I.’s disciplinary proceedings and interpretative criteria will begin to influence the design and defence of internal information systems, investigations, and whistleblower protection guarantees.

From an international perspective, the sanctions regime has continued to expand and become more sophisticated, directly impacting criminal risk and cross-border internal investigations. At EU level, 2025 saw the adoption of additional packages of sanctions against Russia (e.g. the 16th in February and the 18th in July), and the beginning of 2026 saw proposals for new rounds of sanctions (the 20th package is already being discussed), with a particular focus on energy, finance, circumvention, and the “shadow fleet”. This increases potential criminal exposure in international trade, logistics, finance, professional services, and technology transactions, raising the standard of due diligence required of companies and executives.

Finally, Venezuela is once again an area of regulatory uncertainty, both in terms of criminal law and compliance. On the one hand, the EU has maintained or renewed its restrictive measures linked to the political and human rights situation. On the other hand, in the US, there have been recent developments in the OFAC licensing/authority regime regarding oil and gas activities, resulting in a highly dynamic environment that is sensitive to foreign policy decisions, thereby requiring extreme scrutiny of compatibility (EU/US) and the contractual and financial traceability of business transactions.

In conclusion, the period from 2025 to early 2026 marks the consolidation of a criminal justice agenda that is characterised by (i) the operational implementation of LO 1/2025 and its procedural effects; (ii) international regulatory pressure (in terms of sanctions) and its likely repercussions in terms of specific criminal offences and increased litigation involving the evasion of sanctions; (iii) the maturing of the A.A.I. and its direct impact on internal investigations; and (iv) increasingly demanding case law with regard to corporate criminal liability and proof of the effectiveness of compliance.

## 2. Novedades normativas

**Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia**, publicada en el BOE el 3 de enero de 2025, nace con un objetivo claro: mejorar la eficiencia del Servicio Público de Justicia. La norma se presenta como un instrumento para reducir tiempos de respuesta, reforzar garantías de los ciudadanos y acelerar la transformación digital del sistema, mediante una reorganización estructural y ajustes procedimentales que pretenden racionalizar cargas y evitar trámites redundantes.

Entre sus novedades principales destaca, en primer lugar, la reordenación organizativa de la planta judicial: se avanza desde el modelo de juzgados unipersonales hacia tribunales de instancia, apoyados por la Oficina Judicial, y se sustituyen los antiguos juzgados de paz por las Oficinas de Justicia. Esta reconfiguración pretende homogeneizar la respuesta judicial y mejorar la asignación de recursos.

En segundo lugar, la Ley refuerza instrumentos de desjudicialización en el ámbito civil y mercantil, imponiendo la necesidad de acudir a Medios Adecuados de Solución de Controversias (“MASC”) como requisito previo a la interposición de demanda. La falta de acreditación de ese intento puede llevar a la inadmisión de la demanda, con el consiguiente impacto práctico en la estrategia precontenciosa y en la documentación de los intentos de solución extrajudicial.

En el ámbito penal, la norma introduce ajustes orientados a la racionalización de canales y a la priorización de determinados procedimientos: se acotan las denuncias telemáticas y se refuerza la atención preferente a asuntos que afecten a menores, además de incorporar medidas funcionales de agilización y coordinación. A ello se suma el impulso a la notificación electrónica a personas jurídicas, alineada con la digitalización del proceso y la trazabilidad de las comunicaciones.

Finalmente, se introducen mecanismos para acelerar la tramitación y reducir costes de desplazamiento y reiteración de actuaciones, como la posibilidad de vistas discrecionales y sentencias orales en determinados supuestos, así como la simplificación de determinadas comunicaciones procesales: la Policía Judicial asume un papel reforzado en la información de derechos a ofendidos y perjudicados, mientras que el LAJ limita su comunicación a los datos estrictamente necesarios (número de procedimiento y órgano competente). La Ley previó una entrada en vigor general a los tres meses de su publicación (3 de abril de 2025) y su aplicación se proyecta, con carácter general, sobre los procedimientos iniciados con posterioridad a esa fecha.

**Real Decreto 607/2025, de 8 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 95/2009, de 6 de febrero, por el que se regula el Sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia**, aprobado por el Consejo de Ministros introduce una reforma integral del Sistema de Registros Administrativos de Apoyo a la Administración de Justicia (“SIRAJ”), actualizando su estructura y denominaciones —incluidos los registros de penados, medidas cautelares, víctimas, rebeldes civiles, menores y delincuentes sexuales y de trata— y adaptándolo al sistema europeo

## 2. Regulatory developments

**Organic Law 1/2025, of 2 January, on measures for the efficiency of the Public Service of Justice**, which was published in the BOE on 3 January 2025, was created with a clear objective: to improve the efficiency of the Public Service of Justice. The regulation is designed as an instrument to reduce response times, strengthen guarantees to citizens, and accelerate the digital transformation of the system, through structural reorganisation and procedural adjustments aimed at streamlining workloads and avoiding redundant procedures.

The main new features include, firstly, the organisational restructuring of the judicial system: a move away from the model of single-person courts towards courts of first instance, supported by the Judicial Office, and the replacement of the former magistrates' courts with Justice Offices. This reconfiguration seeks to homogenise the judicial response and improve the allocation of resources.

Secondly, the Law reinforces instruments of “*dejudicialisation*” in the civil and commercial sphere, imposing the need to resort to Alternative Dispute Resolution (“ADR”) as a prerequisite for the filing of a claim. The failure to provide evidence of such an attempt may lead to the dismissal of the claim, with the consequent impact on the pre-litigation strategy and the documentation of attempts at out-of-court settlement.

In the criminal sphere, the regulation introduces adjustments aimed at streamlining channels and prioritising certain procedures: electronic complaints are limited, and preferential attention is given to cases involving minors, in addition to incorporating functional measures to speed up and coordinate proceedings. In addition, there has been a push towards the electronic notification of legal persons, in keeping with the digitalisation of the process and the traceability of communications.

Finally, measures have been introduced to speed up the processing of cases and to reduce the costs of travel and the re-hearing of proceedings, such as the option of discretionary hearings and oral judgments in certain cases, as well as the simplification of certain procedural communications: the Judicial Police has taken on a greater role in informing victims and injured parties of their rights, while the Legal Assistance Law (“LAJ”) limits its communication to strictly necessary information (case number and competent body). The Law provided for its general entry into force three months after its publication (3 April 2025), and its application is generally expected to cover proceedings initiated after that date.

**Royal Decree 607/2025, of 8 July, amending Royal Decree 95/2009 of 6 February, regulating the System of Administrative Registers in Support of the Administration of Justice**, approved by the Council of Ministers, introduces a comprehensive reform of the System of Administrative Registers in Support of the Administration of Justice (“SIRAJ”), by updating its structure and nomenclature — including the registers of convicted persons, precautionary measures, victims, persons declared in default, minors, sex offenders and traffickers — and

ECRIS-TCN para mejorar la identificación de condenas de nacionales de terceros países. La norma precisa conceptos como requisitos y autos de rebeldía, refuerza los mecanismos de supervisión y amplía el acceso al sistema a policías locales, autonómicas y otros cuerpos con funciones de policía judicial, facilitando la consulta inmediata de antecedentes y la tramitación de multirreincidentes. Asimismo, moderniza los procedimientos de cancelación y rectificación, permitiendo actuaciones de oficio y supresiones automatizadas, e integra el SIRAJ en la Plataforma de Intermediación de Datos para agilizar certificaciones y apoyar el Plan de choque contra la multirreincidencia, reforzando la seguridad y la eficiencia judicial.

**Orden PJC/908/2025, de 8 de agosto (BOE 12/08/2025), sobre la puesta en funcionamiento de la Autoridad Independiente de Protección del Informante (“A.A.I.”).** Esta Orden ministerial fija formalmente la fecha de entrada en funcionamiento de la A.A.I. creada por la Ley 2/2023, estableciéndola en el 1 de septiembre de 2025, y regula el régimen transitorio de apoyo por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes hasta el 1 de noviembre de 2025 (RR.HH., infraestructura, contratación, medios informáticos y web), además de prever la financiación con cargo a créditos ministeriales hasta que la Autoridad cuente con presupuesto propio.

Acceso a las [Circulares, Recomendaciones y Guías](#):

- » **GUÍA AIPI 1/2026 (RSII) – “Notificación del Responsable del Sistema Interno de Información” (9/02/2026).** Documento eminentemente operativo sobre cumplimiento formal ante la AIPI: delimita qué sujetos obligados deben notificar el nombramiento y cese del Responsable del Sistema Interno de Información (“RSII”), qué datos/soportes deben aportarse, plazos y canales de remisión, y cómo resolver supuestos frecuentes (RSII órgano colegiado vs. persona física; designación compartida en grupos; sector público vs. privado). Es especialmente útil para evitar incidencias por defectos de designación (independencia/conflicto de interés) o por omisiones en la comunicación administrativa.
- » **RECOMENDACIÓN AIPI 1/2025 (Partidos políticos) – “Gestión del Sistema Interno de Información en partidos políticos”.** Recomendación sectorial con enfoque de gobernanza del canal en organizaciones con alta exposición reputacional y dinámica interna singular. Aporta criterios prácticos para: (i) configurar el sistema evitando captura o instrumentalización del canal (filtrado de mala fe, uso estratégico en conflictos internos), (ii) reforzar confidencialidad y trazabilidad de accesos, (iii) definir perímetro de informaciones y tratamiento de comunicaciones anónimas, y (iv) articular el rol del RSII y de terceros gestores con separación funcional. Es una guía útil para diseñar procedimientos que resistan un escrutinio externo (AIPI) y, a la vez, sean practicables en estructuras territoriales/sectoriales complejas.
- » **RECOMENDACIÓN AIPI 1/2026 (Sistema Interno de Información) – “Diseño e implementación del Sistema Interno de Información”.** Texto “marco” para el diseño técnico-ju-

adapting it to the European ECRIS-TCN system to improve the identification of convictions of third-country nationals. The regulation specifies concepts such as wanted alerts and default orders, reinforces supervision mechanisms, and extends access to the system to local and regional police and other bodies with judicial police functions, facilitating immediate consultation of criminal records and the processing of multiple offenders. It also modernises the cancellation and rectification procedures, allowing ex officio actions and automated deletions, and integrates the SIRAJ into the Data Intermediation Platform to speed up certifications and support the Action Plan against repeat offending, thereby reinforcing security and judicial efficiency.

**Order PJC/908/2025, of 8 August (BOE 12/08/2025), on the implementation of the Independent Authority for the Protection of Whistleblowers (“A.A.I.”).** This Ministerial Order formally establishes the date of entry into operation of the A.A.I. created by Law 2/2023, setting it at 1 September 2025, and regulates the transitional support regime by the Ministry of the Presidency, Justice and Relations with the Courts until 1 November 2025 (human resources, infrastructure, procurement, IT resources and website), as well as providing for funding from ministerial appropriations until the Authority has its own budget.

Access to the [Circulars, Recommendations and Guidelines](#):

- » **AIPI GUIDE 1/2026 (RSII) - “Notification to the Internal Information System Manager” (9/02/2026).** A highly practical document on formal compliance with the AIPI: it specifies which parties are required to notify the appointment and dismissal of the Internal Information System Manager (“IISM”), which data/supporting documentation must be provided, deadlines and channels for submission, and how to resolve common issues (the IISM as a collegiate body vs. a natural person; shared appointment in groups, and the public sector vs. private sector). It is particularly useful for avoiding incidents due to designation defects (independence/conflict of interest) or omissions in administrative communication.
- » **AIPI RECOMMENDATION 1/2025 (Political parties) – “Management of the Internal Information System in political parties”.** A sectoral recommendation with a focus on channel governance in organisations with high reputational exposure and unique internal dynamics. It provides practical criteria for: (i) configuring the system to prevent the capture or instrumentalisation of the channel (filtering in bad faith, strategic use in internal conflicts), (ii) reinforcing confidentiality and traceability of access, (iii) defining the scope of information and the treatment of anonymous communications, and (iv) articulating the role of the IISM and third-party managers with functional separation. It is a useful guide for designing procedures that withstand external scrutiny (AIPI) and, at the same time, are practicable in complex territorial/sectoral structures.
- » **AIPI RECOMMENDATION 1/2026 (Internal Information System) - “Design and implementation of the Internal Information System”.** A “framework” text for the techni-

rídico del sistema conforme a la Ley 2/2023: baja a nivel de arquitectura (canal escrito / verbal, gestión propia o por tercero, registro y custodia), fija criterios de minimización de datos, confidencialidad y segregación de funciones, y propone estándares de procedimiento (acuse, admisión, investigación, cierre, medidas de protección). Incluye un enfoque de control y mejora continua (indicadores, revisiones, auditoría interna del sistema) y una *checklist* final que funciona como herramienta de verificación para implantaciones y revisiones de *compliance*.

- » **RECOMENDACIÓN AIPI 2/2026 (Entidades Locales) – “Sistema Interno de Información en la Administración Local”.** Adaptación específica para el sector público local, donde los riesgos típicos son la falta de separación orgánica, la proximidad entre informante/informado y la rotación de cargos. Establece pautas de implementación “realistas” para ayuntamientos y entes dependientes: opciones de centralización (municipio/entidad instrumental), medidas reforzadas de confidencialidad y acceso restringido, criterios para designar RSII con independencia efectiva, y recomendaciones sobre externalización, recursos y compatibilidad con normativa de empleo público y protección de datos. Incluye verificación final para asegurar que el sistema no sea solo formal, sino operable y defendible ante inspección/sanción.

**Actualización de la norma UNE 19601:2025.** El pasado 24 de abril de 2025 entró en vigor la nueva versión de la norma UNE 19601, que marca un hito en el desarrollo del *compliance* penal, al consolidarse como un estándar técnico con vocación de aplicación extraterritorial, especialmente en el contexto latinoamericano.

Aunque concebida en el marco del sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas en España, la norma se presenta como una guía aplicable a cualquier organización, pública o privada, que enfrente riesgos criminales, incluso en jurisdicciones que prevén responsabilidad penal o administrativa para personas jurídicas.

La UNE 19601 adopta un enfoque amplio del riesgo criminal, más allá de lo penal, incluyendo infracciones como el fraude interno o las previstas en marcos sancionadores administrativos. Su estructura está alineada con los estándares internacionales ISO (como ISO 37301, 37001 o 31000), lo que facilita su integración en programas globales de cumplimiento.

Entre las principales mejoras de la versión de 2025, se destacan:

- » Mayor alineación con otros estándares internacionales
- » Clarificación de funciones del *compliance* penal
- » Separación entre formación y concienciación
- » Revisión de los controles sobre inversiones financieras

La norma puede ser certificada por terceros independientes, y su implementación efectiva permite acreditar la debida diligencia,

cal-legal design of the system under Law 2/2023: it reduces it to the level of architecture (written/verbal channel, own or third-party management, registration and custody), sets criteria for data minimisation, confidentiality and segregation of duties, and proposes procedural standards (acknowledgement, admission, investigation, closure and protective measures). It includes a focus on control and continuous improvement (indicators, reviews and an internal system audit) and a final checklist that serves as a verification tool for the implementation and review of compliance.

- » **AIPI RECOMMENDATION 2/2026 (Local Authorities) - “Internal Information System in Local Government”.** This is specifically adapted for the local public sector, where the typical risks are the absence of organisational separation, the proximity between the whistleblower and the person being reported, and job rotation. It sets out “realistic” implementation guidelines for municipalities and dependent entities: centralisation options (municipality/instrumental entity), enhanced confidentiality and restricted access measures, criteria for designating IISMs with effective independence, and recommendations on outsourcing, resources, and compatibility with public employment and data protection regulations. It includes a final verification process to ensure that the system has not only been formally implemented but is also operable and defensible against inspections/sanctions.

**Updating of the UNE 19601:2025 standard.** On 24 April 2025, the new version of the UNE 19601 standard came into force, marking a milestone in the development of criminal compliance as a technical standard for extra-territorial application, especially in the context of Latin America.

Although conceived within the framework of the system of criminal liability of legal persons in Spain, the standard is presented as a guide applicable to any organisation, public or private, that faces criminal risks, even in jurisdictions that provide for criminal or administrative liability for legal persons.

UNE 19601 adopts a broad approach to criminal risk, going beyond criminal offences to include infractions such as internal fraud or those provided for in administrative sanctioning frameworks. Its structure is aligned with international ISO standards (such as ISO 37301, 37001 or 31000), which facilitates its integration into global compliance programmes.

Among the main improvements of the 2025 version are the following:

- » Greater alignment with other international standards
- » Clarification of criminal compliance functions
- » Separation between training and the raising of awareness
- » Review of controls over financial investments

The standard can be certified by independent third parties, and its effective implementation provides evidence of due diligen-

lo que puede resultar atenuante o eximente de responsabilidad penal. Su adopción fuera de España se justifica por su utilidad como marco técnico reconocido, por su enfoque preventivo y ético, y porque los principios que incorpora ya están presentes en legislaciones y programas de cumplimiento de muchos países latinoamericanos.

**Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para la transposición de la Directiva (UE) 2024/1226 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de abril de 2024, relativa a la definición de los delitos y las sanciones por la vulneración de las medidas restrictivas de la Unión, y por la que se modifica la Directiva (UE) 2018/1673.** El texto del Proyecto, actualmente en fase de tramitación en el Congreso de los Diputados, introduce un nuevo título específico dedicado a los delitos contra el espacio de libertad, seguridad y justicia de la Unión Europea. El nuevo Título XXIII *bis* del Libro II del Código Penal se ubica inmediatamente después de los delitos contra la comunidad internacional. Esta ubicación sistemática evidencia una intención clara de distinguir entre los delitos que afectan a bienes jurídicos propios del orden jurídico internacional general y aquellos que protegen intereses institucionales y normativos de la Unión Europea.

El nuevo título se compone de nueve artículos, numerados del 604 *bis* al 604 *nonies* CP, precedidos de una modificación puntual del artículo 301 CP, que aclara que la infracción de medidas restrictivas de la Unión podrá constituir delito precedente de blanqueo de capitales, incluso cuando se haya cometido fuera del territorio español, siempre que sea punible en el lugar de comisión.

Desde el punto de vista estructural, el Título XXIII *bis* presenta una arquitectura interna clara, que puede sistematizarse en tres bloques funcionales:

- » Tipificación de conductas punibles (arts. 604 *bis* a 604 *quater* CP): estos artículos describen los supuestos de infracción activa y omisiva de las medidas restrictivas, en línea con el catálogo mínimo impuesto por la Directiva.
- » Régimen de circunstancias modificativas (arts. 604 *quinquies* a 604 *septies* CP): se recogen agravantes específicas, así como atenuantes vinculadas a la colaboración eficaz y una causa de exclusión de punibilidad en caso de finalidad humanitaria.
- » Responsabilidad penal de las personas jurídicas y consecuencias accesorias (arts. 604 *octies* y 604 *nonies* CP): se establece un régimen sancionador específico para personas jurídicas, incluyendo multas proporcionales al volumen de negocio, y se habilita al órgano jurisdiccional para acordar, en su caso, la publicación de la sentencia condenatoria como medida adicional.

De forma complementaria, se introduce una disposición final que modifica la para incluir expresamente la infracción de medidas restrictivas como una categoría susceptible de ser denunciada a través de los canales internos.

ce, which may mitigate or exonerate from criminal liability. Its adoption outside Spain is justified by its usefulness as a recognised technical framework, by its preventive and ethical approach, and because the principles it incorporates are already present in the legislation and compliance programmes of many Latin American countries.

**Draft Organic Law amending Organic Law 10/1995, of 23 November, on the Criminal Code, for the transposition of Directive (EU) 2024/1226 of the European Parliament and of the Council of 24 April 2024 on the definition of criminal offences and penalties for the violation of Union restrictive measures and amending Directive (EU) 2018/1673.** The text of the Draft, currently being processed in the Congress of Deputies, introduces a new specific title dedicated to crimes against the area of freedom, security, and justice of the European Union. The new Title XXIII *bis* of Book II of the Criminal Code is placed immediately after crimes against the international community. This systematic placement is evidence of a clear intention to distinguish between offences that affect the legal interests of the general international legal order and those that protect institutional and regulatory interests of the European Union.

The new title comprises nine articles, numbered from 604 *bis* to 604 *nonies* of the Criminal Code, preceded by a specific amendment to Article 301 of the Criminal Code, which clarifies that the infringement of Union restrictive measures may constitute a predicate offence for money laundering, even when committed outside Spanish territory, provided that it is punishable in the place of its commission.

From a structural point of view, Title XXIII *bis* has a clear internal architecture, which can be broken down into three functional sections:

- » Classification of conduct subject to criminal penalties (Articles 604 *bis* to 604 *quater* of the Criminal Code): these articles describe the cases of active and passive infringement of restrictive measures, in line with the minimum requirements imposed by the Directive.
- » Regime of modifying circumstances (Articles 604 *quinquies* to 604 *septies* of the Criminal Code): specific aggravating factors are included, as well as mitigating factors linked to effective collaboration and a ground for exemption from criminal sanctions in the case of humanitarian reasons.
- » Criminal liability of legal persons and additional consequences (Articles 604 *octies* and 604 *nonies* of the Criminal Code): a specific sanctioning regime has been established for legal persons, including fines proportional to turnover, and judicial bodies are empowered to order, where appropriate, the publication of convictions as an additional measure.

In addition, a final provision has been introduced that amends the law to expressly include the infringement of restrictive measures as a category that can be reported through internal channels.

Asimismo, se prevé la creación de una Comisión Mixta de Coordinación, adscrita al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, con funciones de articulación operativa entre autoridades judiciales, policiales y administrativas. Esta Comisión responde a una exigencia específica de la Directiva y se concibe como pieza clave en la eficacia transversal del nuevo régimen.

En conjunto, la propuesta normativa proyectada traslada con bastante fidelidad los elementos esenciales exigidos por el instrumento europeo.

**Proyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal**, actualmente en fase de tramitación en el Congreso de los Diputados, busca sustituir a la ley de 1882 para modernizar el proceso penal y adecuarlo al siglo XXI. La principal novedad es que las investigaciones serán dirigidas por el Ministerio Fiscal, bajo el control de un juez de garantías, lo que agilizará los procedimientos y reforzará las garantías procesales de acusados y víctimas. Se crean figuras como el juez de garantías y el juez de la audiencia preliminar, se simplifican los recursos y se refuerza la protección de las víctimas, especialmente de menores o personas vulnerables. La ley regula nuevas herramientas tecnológicas de investigación, moderniza la acusación popular y adapta el Estatuto del Ministerio Fiscal para asegurar su autonomía, ampliando a cinco años el mandato del Fiscal General del Estado. Entrará en vigor el 1 de enero de 2028, sin afectar a procedimientos anteriores.

**Proyecto de real decreto por el que se modifica el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo aprobado por el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo.** El documento, sometido a fase de consulta pública hasta el pasado 3 de febrero de 2026 a través del Ministerio de Economía, constituye proyecto de Real Decreto de modificación del Reglamento de la Ley 10/2010 de PBC/FT, aprobado por el Real Decreto 304/2014, orientado a actualizar y reforzar el desarrollo reglamentario en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo: adapta el marco a la evolución de riesgos y tipologías (incluidos criptoactivos y nuevas formas de intermediación), incorpora estándares del GAFI, corrige lagunas apreciadas en la aplicación práctica y anticipa, en la medida posible por vía reglamentaria, elementos del paquete normativo europeo en materia de prevención de blanqueo de capitales (Reglamento (UE) 2024/1624 y Directiva (UE) 2024/1640), con el objetivo de elevar los estándares de gobernanza, control interno, cooperación y eficacia supervisora de cara a la evaluación internacional prevista para 2026.

**Transposición de la Directiva (UE) 2024/1640 del PE y del Consejo, de 31 de mayo de 2024, relativa a los mecanismos que deben establecer los Estados miembros a efectos de la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.** En el mismo sentido, este documento articula la consulta pública previa para la futura norma de transposición de la Directiva (UE) 2024/1640 y de adaptación del ordenamiento español al mencionado Reglamento (UE) 2024/1624 con el objetivo de modernizar y armonizar el sistema nacional de prevención de blanqueo de capitales y financia-

It also provides for the creation of a Joint Coordination Commission, attached to the Ministry of the Presidency, Justice and Relations with the Courts, with functions of operational coordination between judicial, police and administrative authorities. This Commission fulfils a specific requirement of the Directive and has been conceived as a key element in the cross-cutting effectiveness of the new regime.

Overall, the proposed legislation closely reflects the essential elements required by the European legislation.

**The Draft Organic Law of Criminal Procedure**, currently being debated in the Congress of Deputies, seeks to replace the 1882 law in order to modernise the criminal process and adapt it to the 21st century. The main new feature is that investigations will be led by the Public Prosecutor's Office, under the control of a judge of guarantees, which will speed up procedures and strengthen the procedural guarantees of defendants and victims. New roles such as the judge of guarantees and the preliminary hearing judge have been created, appeals have been simplified and the protection of victims, especially minors or vulnerable persons, has been reinforced. The law regulates new technological investigative tools, modernises the public prosecution, and adapts the Statute of the Public Prosecutor's Office to ensure its autonomy, extending the term of office of the Public Prosecutor to five years. It will enter into force on 1 January 2028, without affecting earlier procedures.

**Draft Royal Decree amending the Regulation of Law 10/2010, of 28 April, on the prevention of money laundering and terrorist financing, approved by Royal Decree 304/2014, of 5 May.** The document, which was subject to a public consultation phase until 3 February 2026 through the Ministry of Economy, is a draft Royal Decree amending the Regulation of Law 10/2010 on AML/CFT, approved by Royal Decree 304/2014, which seeks to update and reinforce the regulatory development in the prevention of money laundering and terrorist financing: it adapts the framework to the evolution of risks and categories (including crypto-assets and new forms of intermediation), incorporates FATF standards, corrects gaps identified in practical application and anticipates, to the extent possible by regulatory means, elements of the European regulatory package on the prevention of money laundering (Regulation (EU) 2024/1624 and Directive (EU) 2024/1640), with the aim of raising standards of governance, internal control, cooperation and supervisory effectiveness in view of the international assessment scheduled for 2026.

**Transposition of Directive (EU) 2024/1640 of the European Parliament and of the Council of 31 May 2024 on the mechanisms to be put in place by Member States for the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing.** Similarly, this document sets out the prior public consultation for the future regulation transposing Directive (EU) 2024/1640 and adapting Spanish law to the aforementioned Regulation (EU) 2024/1624 with the aim of modernising and harmonising the national system for the prevention of money laundering and terrorist finan-

ción del terrorismo: refuerza el marco institucional (competencias e independencia de supervisores y UIF, cooperación y colegios de supervisores), amplía y precisa obligaciones de sujetos obligados y controles internos, endurece y homogeneiza el régimen sancionador, y, de forma muy destacada, introduce un salto en transparencia de titularidad real (como la mejora de calidad y verificación del Registro Central, acceso, interés legítimo, y creación de un punto único de acceso a información de bienes inmuebles), anticipando además la interacción con la futura AMLA.

**Anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública.** El Anteproyecto de Ley Orgánica, actualmente en fase de audiencia e información pública, configura un Sistema Nacional de Integridad Pública orientado a prevenir, detectar y combatir la corrupción y el fraude en el sector público.

En su Título Preliminar define su objeto, objetivos y ámbito subjetivo de aplicación, extendiéndose a todas las Administraciones Públicas, sector público institucional, Seguridad Social, universidades públicas, corporaciones de derecho público y, en determinados aspectos, partidos políticos.

El Libro I articula un sistema integral de prevención basado en marcos estratégicos de integridad, evaluación periódica, cultura organizativa, mapas de riesgos, diligencia debida y refuerzo del control interno. Introduce obligaciones específicas como la implantación de procedimientos antifraude, declaraciones de ausencia de conflicto de interés (“DACI”), evaluación anual por inspecciones de servicios y la creación de unidades de auditoría interna independientes en el sector público empresarial y fundacional.

El texto incorpora además medidas estructurales de alto impacto en el ámbito empresarial, contractual y político. En materia societaria, reforma profundamente el régimen de las sociedades de responsabilidad limitada, estableciendo la inscripción constitutiva obligatoria de todas las participaciones sociales en una sección especial del Registro Mercantil, reforzando la trazabilidad de la titularidad real y otorgando eficacia frente a terceros únicamente a quien figure inscrito. En contratación pública, impone mayores exigencias de transparencia, profesionalización y digitalización —con obligatoriedad de licitación electrónica antes del 1 de enero de 2028—, introduce controles reforzados en procedimientos de emergencia, mejora el ROLECS y exige modelos de *compliance* en grandes empresas contratistas. Para los partidos políticos, establece auditorías externas obligatorias, mayores obligaciones de transparencia financiera y un régimen sancionador más severo. Todo ello se complementa con un bloque de innovación tecnológica que generaliza el uso de inteligencia artificial y análisis automatizado de datos —incluido el modelo MINERVA ampliado— para la detección de riesgos sistémicos y conflictos de interés.

El Libro II crea la Agencia Independiente de Integridad Pública, autoridad administrativa independiente con autonomía orgánica y funcional, que integrará funciones actualmente dispersas y actuará como eje del sistema nacional anticorrupción, con competencias en prevención, investigación administrativa, protección del informante, supervisión de conflictos de interés y coordinación

cing: it strengthens the institutional framework (the powers and independence of supervisors and FIUs, cooperation and colleges of supervisors), expands and clarifies the obligations of obliged entities and internal controls, toughens and standardises the penalty regime, and, most notably, transforms the transparency of beneficial ownership (by improving the quality and verification of the Central Register, access, legitimate interest, and creating a single point of access to information on real estate), also anticipating interaction with the future AMLA.

**Preliminary Draft of the Organic Law on Public Integrity.** The Preliminary Draft Organic Law, currently at the hearing and public information stage, sets up a National Public Integrity System aimed at preventing, detecting, and combating corruption and fraud in the public sector.

In its Preliminary Title, it defines its purpose, objectives and subjective scope of application, applying to all public administrations, the institutional public sector, social security, public universities, public law corporations, and, in certain respects, political parties.

Book I sets out a comprehensive prevention system based on strategic integrity frameworks, periodic evaluation, organisational culture, risk maps, due diligence, and the reinforcement of internal control. It introduces specific obligations such as the implementation of anti-fraud procedures, declarations of the absence of conflicts of interest (“DACI”), annual evaluation by service inspections and the creation of independent internal audit units in the public business and foundation sector.

The text also incorporates structural measures with a high impact on business, contracts and politics. Regarding corporate matters, it profoundly reforms the limited liability company regime, establishing the mandatory registration of all shares in a special section of the Commercial Registry, reinforcing the traceability of beneficial ownership, and only granting effectiveness against third parties to those which are registered. In the area of public procurement, it imposes greater requirements for transparency, professionalism and digitisation (with mandatory electronic tendering before 1 January 2028), introduces reinforced controls in emergency procedures, improves the Official Register of Tenderers and Classified Companies of the Public Sector (*Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público*) (“ROLECS”) and requires compliance models in large contracting companies. It also establishes mandatory external audits, greater financial transparency obligations, and a more severe sanctioning regime for political parties. All of this is supplemented by a package of technological innovations that promotes the widespread use of artificial intelligence and automated data analysis - including the expanded MINERVA model - for the detection of systemic risks and conflicts of interest.

Book II creates the Independent Public Integrity Agency, an independent administrative authority with organisational and functional autonomy, which will integrate currently disparate functions and act as the backbone of the national anti-corruption system, with competences in prevention, administrative investigation, whistleblower protection, the monitoring of

con organismos nacionales y europeos. Se refuerzan asimismo las capacidades del Poder Judicial y del Ministerio Fiscal, se endurece el régimen penal aplicable a personas jurídicas y se amplían plazos de prescripción.

El Libro III transpone la Directiva (UE) 2024/1260, reforzando el decomiso y la recuperación de activos, ampliando las competencias de la ORGA y habilitando medidas de investigación financiera inmediata.

El Anteproyecto se completa con disposiciones transitorias para una implantación gradual —especialmente en materia registral y contratación electrónica—, una disposición derogatoria general, diez disposiciones finales (incluyendo habilitaciones reglamentarias y título competencial) y la entrada en vigor a los veinte días de su publicación en el BOE, previendo habilitaciones “*per saltum*” al Ministerio de Hacienda para materias técnicas de ejecución urgente.

---

**Propuesta de Directiva europea para combatir la corrupción (COD 2023/0135).** Esta propuesta- actualmente en la espera de la posición del Parlamento Europeo en primera lectura- tiene como objetivo actualizar y reforzar el marco normativo de la UE en esta materia, partiendo de la constatación de que la corrupción sigue siendo una amenaza grave para la estabilidad institucional, la seguridad jurídica y el buen funcionamiento del mercado interior. La iniciativa se articula como una Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, a aprobarse mediante el procedimiento legislativo ordinario, y pretende superar las limitaciones de los instrumentos vigentes —en particular, la Decisión Marco 2003/568/JAI y la Convención sobre la corrupción de funcionarios—, considerados insuficientes y fragmentados por las divergencias existentes entre los Estados miembros y las dificultades de cooperación transfronteriza.

conflicts of interest, and coordination with national and European bodies. The powers of the Judiciary and the Public Prosecutor’s Office have also been strengthened, the criminal regime applicable to legal persons has been toughened, and limitation periods have been extended.

Book III transposes Directive (EU) 2024/1260, strengthening the confiscation and recovery of assets, extending the powers of the Office for Asset Recovery and Management (*Oficina de Recuperación y Gestión de Activos*) (“**ORGA**”), and enabling immediate financial investigation measures.

The Preliminary Draft includes transitional provisions for gradual implementation (especially in the areas of registration and electronic procurement), a general repealing provision, ten final provisions (including regulatory authorisations and jurisdictional title), and will enter into force twenty days after its publication in the Official State Gazette, providing for “*per saltum*” authorisations to the Ministry of Finance for urgent technical matters.

---

**Proposal for a European Directive on combating corruption (COD 2023/0135).** This proposal, which is currently awaiting the European Parliament’s position at first reading, is intended to update and strengthen the EU’s regulatory framework in this area, based on the observation that corruption continues to be a serious threat to institutional stability, legal certainty, and the proper functioning of the internal market. The initiative takes the form of a Directive of the European Parliament and of the Council, to be adopted through the ordinary legislative procedure, and seeks to overcome the limitations of existing legislative instruments, in particular Framework Decision 2003/568/JHA and the Convention against corruption involving public officials, which are considered insufficient and fragmented due to divergences between Member States and difficulties in cross-border cooperation.

### 3. Novedades jurisprudenciales

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO 49/2025, de 7 de enero

- **Ponente:** *Excmo. Sr. D. Manuel Marchena Gómez*
- **Asunto:** *Límites a la investigación tributaria: nulidad de actuaciones de comprobación sobre ejercicios prescritos en vía administrativa (art. 66 LGT), aunque el delito fiscal no haya prescrito (art. 131 CP)*

La Sala Segunda resuelve el recurso de casación interpuesto por la AEAT contra una sentencia absolutoria confirmada en apelación, en un procedimiento por delito contra la Hacienda Pública (art. 305 CP). El caso parte de la percepción por la acusada de 1.000.000 € derivados de una compraventa con condición resolutoria y su falta de reflejo en declaraciones de IRPF, abriéndose actuaciones inspeccionadas en 2015 pese a que los actuarios asumían que el derecho administrativo a liquidar el IRPF 2010 estaba prescrito.

El Tribunal distingue con nitidez entre prescripción penal (del delito) y prescripción administrativa (del derecho de la Administración a determinar la deuda mediante liquidación). Reitera que la tipicidad / consumación del art. 305 CP se proyecta sobre el momento del impago y que la extinción posterior de la deuda tributaria no “borra” el delito ya consumado, por lo que la responsabilidad penal se extingue por la prescripción del delito, no por la prescripción administrativa de la deuda. Ahora bien, esa diferencia conceptual no autoriza a la Inspección a desplegar una actividad investigadora “hacia atrás” sobre deudas ya prescritas administrativamente, por el solo hecho de que el delito todavía pudiera no haber prescrito.

La clave está en la interpretación de los arts. 66, 66 *bis* y 115 LGT (tras la reforma de 2015): la Sala declara inequívoco que existen límites legales a la comprobación / investigación cuando el periodo está prescrito para liquidar. La inspección sobre ejercicios prescritos solo es legítima si es funcionalmente necesaria para determinar cuotas exigibles en periodos no prescritos o en los supuestos tasados (bases / cuotas pendientes de compensación o deducciones, con régimen específico). Fuera de esos casos, admitir una “autonomía investigadora” de la AEAT sobre ejercicios prescritos desbordaría el sistema de prescripción de la LGT y supondría una fiscalización retroactiva carente de cobertura legal. La sentencia enlaza esta conclusión con la doctrina ya fijada en la STS 586/2020, que consideró ineficaces en el orden penal las investigaciones tributarias realizadas sin amparo legal sobre periodos prescritos.

Además, el Tribunal rechaza expresamente el planteamiento de la Abogacía del Estado de que la ausencia de afectación concreta a un derecho fundamental impida hablar de ilicitud / nulidad: sostiene que investigar una deuda prescrita “al margen de toda cobertura legal” vulnera principios constitucionales (legalidad y seguridad jurí-

### 3. Case law developments

SUPREME COURT JUDGMENT No. 49/2025, of 7 January

- **Reporting Judge:** *The Honourable Mr Manuel Marchena Gómez*
- **Subject matter:** *Limits on tax investigations: invalidity of verification proceedings regarding prescribed financial years in administrative proceedings (Article 66 of the General Tax Law), even if the tax offence is not prescribed (Article 131 of the Criminal Code)*

The Second Chamber ruled on an appeal filed by the Spanish Tax Agency (AEAT) against an acquittal upheld on appeal in proceedings for a crime against the Public Treasury (Article 305 of the Criminal Code). The case arose from the defendant's receipt of €1,000,000 from a sale and purchase with a condition subsequent and the failure to include it in personal income tax returns, with the opening of inspection proceedings in 2015, despite the fact that the actuaries assumed that the administrative right to liquidate the 2010 personal income tax was prescribed.

The Court distinguished between criminal statutes of limitation (of the offence) and administrative statutes of limitation (of the administration's right to determine the debt by assessment). The Court reiterated that the criminalisation/consummation of Article 305 of the Criminal Code applies at the moment of non-payment and that the subsequent extinguishment of the tax debt does not “erase” the crime already committed, meaning that criminal liability is extinguished by the limitation period of the crime, not by the administrative limitation period of the debt. However, this conceptual difference does not authorise the Inspectorate to carry out a “retrospective” investigation into debts that are already administratively prescribed, just because the offence may not yet be prescribed.

The key lies in the interpretation of Articles 66, 66 *bis* and 115 of the General Tax Law (“LGT”) (after the 2015 reform): the Chamber declared unequivocally that there are legal limits to the verification/investigation when the period for settlement has expired. The inspection of prescribed years is only legitimate if it is functionally necessary to determine tax liabilities in non-prescribed periods or in the cases specified (tax bases/tax liabilities pending compensation or deductions, with a specific regime). Apart from these cases, permitting the AEAT's “investigative autonomy” over prescribed financial years would exceed the limitation periods of the LGT and would involve a retroactive audit without a legal basis. The judgment links this conclusion to the doctrine already established in Supreme Court Judgment No. 586/2020, which held that tax investigations carried out without a legal basis concerning statute-barred periods are ineffective in criminal proceedings.

Furthermore, the Court expressly rejected the approach of the State Attorney's Office to the effect that the absence of a specific impact on a fundamental right prevents it from considering unlawfulness/nullity: the Court held that investigating a prescribed debt “without any legal basis” violates constitutio-

dica) y compromete el derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE), de modo que no cabe normalizar esa prueba por la vía del art. 11 LOPJ. En consecuencia, se declara no haber lugar al recurso.

#### SENTENCIA DE LA AUDIENCIA NACIONAL 138/2025, de 5 de febrero

- **Ponente:** *Ilma. Sra. D<sup>a</sup>. M<sup>a</sup> Fernanda García Pérez*
- **Asunto:** “Cártel del fuego”

La Sala enjuicia una dinámica colusoria estable en el mercado de aeronaves destinadas a la extinción de incendios, articulada mediante mecanismos de coordinación y reparto de licitaciones (turnos / zonas y ajustes internos), cuyo soporte probatorio se asienta en documentación y comunicaciones internas que el tribunal conecta con el patrón de concurrencia y adjudicación en distintos concursos.

Uno de los núcleos doctrinales más remarcables es la solución de concurso de normas entre la asociación ilícita y el art. 262 CP. Aun describiéndose elementos organizativos (cierta permanencia, coordinación y distribución de funciones), la sentencia concluye que el injusto acreditado se proyecta de manera específica sobre el “concierto” para alterar concursos o subastas públicas, por lo que aplica la especialidad y entiende que el art. 262 CP absorbe el reproche autónomo por asociación ilícita, evitando una duplicidad punitiva sobre la misma base asociativa. En esa misma línea, perfila el art. 262 CP como delito pluriofensivo y de mera actividad, consumado con la conducta típica sin necesidad de acreditar un resultado económico concreto.

En el plano de la corrupción en contratación pública, la resolución ordena el conjunto típico en términos de concurso ideal-medial (art. 77 CP) entre cohecho, prevaricación, malversación y falsedad en documento público, al aparecer funcionalmente conectadas las dádivas, las resoluciones injustas, la disposición irregular de fondos y la cobertura documental del expediente.

Finalmente, la sentencia ofrece criterios prácticos en dos puntos. De un lado, aborda el encaje de la respuesta frente a entidades vinculadas a la manipulación de concursos, destacando la tensión normativa existente en el art. 262 CP entre la previsión de inhabilitación para contratar y la remisión a las consecuencias accesorias del art. 129 CP, y subrayando que su aplicación exige una motivación reforzada desde la necesidad preventiva y la proporcionalidad. De otro lado, en relación con el art. 442 CP, diferencia supuestos: confirma la tipicidad cuando se acredita el suministro de información no pública relevante para la licitación con ventaja competitiva, pero excluye su aplicación cuando el material fáctico no permite dotar a esa información de autonomía típica suficiente o cuando el desvalor queda mejor absorbido por la dinámica de la prevaricación o la cooperación en la manipulación del expediente.

nal principles (legality and legal certainty) and compromises the right to a hearing with all guarantees (Article 24.2 of the Spanish Constitution), meaning that this evidence cannot be standardised through Article 11 of the Organic Law of the Judiciary (*Ley Orgánica del Poder Judicial*) (“LOPJ”). Consequently, the appeal was dismissed.

#### NATIONAL HIGH COURT JUDGMENT No. 138/2025, of 5 February

- **Reporting Judge:** *The Honourable Ms María Fernanda García Pérez*
- **Subject matter:** “Fire Cartel”

In this case, the Court considered the question of a stable collusive dynamic in the market for fire-fighting aircraft, organised through coordination mechanisms and the distribution of tenders (shifts/areas and internal adjustments), the evidence for which was based on documentation and internal communications that the Court linked to the pattern of behaviour and the awarding of contracts in different tenders.

One of the most noteworthy aspects of the judgment is the resolution of the conflict between rules on unlawful association and Article 262 of the Criminal Code. Despite describing organisational elements (a certain duration, coordination and distribution of functions), the Court concluded that the established wrongdoing specifically targeted the “collusion” to alter public tenders or auctions, and, therefore, applied the principle of speciality and held that Article 262 of the Criminal Code encompasses the standalone charge of unlawful association, avoiding the duplication of punishment on the same associative basis. Similarly, the Court characterised Article 262 of the Criminal Code as a multi-interest offence and a mere activity, constituted by the typical conduct without the need to prove a specific economic result.

In terms of corruption in public procurement, the judgment establishes the typical set of offences in terms of medial-ideal concurrence (Article 77 of the Criminal Code) between bribery, misconduct in public office, embezzlement and the falsification of public documents, as the gifts, the unlawful resolutions, the improper disposal of funds and the documentary cover provided within the file appear functionally connected.

Finally, the judgment offers practical criteria on two points. Firstly, it addresses the response to entities linked to the manipulation of tenders, highlighting the regulatory tension in Article 262 of the Criminal Code between the provision for disqualification from contracting and the reference to the accessory consequences of Article 129 of the Criminal Code, and underlines that its application requires a reinforced justification based on preventive necessity and proportionality. Secondly, concerning Article 442 of the Criminal Code, it differentiates between cases: it confirms the criminal offence when the provision of non-public information relevant to the tender with a competitive advantage is verified, but excludes its application when the facts do not allow this information to be considered sufficiently autonomous or when the offence is better reflected by the dynamics of misconduct in public office or cooperation in the manipulation of the file.

## SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO 175/2025, de 27 de febrero

- **Ponente:** *Excmo. Sr. D. Antonio del Moral García*
- **Asunto:** *Valoración probatoria tras la repetición del juicio oral: alcance de la prueba practicada en el primer juicio anulado*

El Tribunal Supremo analiza el alcance probatorio de las declaraciones prestadas en un primer juicio oral cuya sentencia fue anulada, cuando se ordena la repetición del plenario ante un tribunal de distinta composición. La cuestión se centra en si el órgano sentenciador del segundo juicio está obligado a contrastar de oficio las declaraciones prestadas en ambos juicios, especialmente a efectos de apreciar contradicciones relevantes para la credibilidad del testimonio de la víctima.

La Sala Segunda establece que la prueba practicada en el juicio anulado no se incorpora automáticamente al nuevo plenario, quedando privada de eficacia probatoria si no es expresamente introducida en el segundo juicio por alguna de las partes. En consecuencia, el tribunal debe fundar su convicción exclusivamente en la prueba practicada con inmediatez en el juicio del que deriva la sentencia, conforme al artículo 741 LECrim.

No obstante, el Tribunal matiza que no existe un obstáculo teórico o legal para que las partes hagan valer posibles contradicciones entre lo declarado en el juicio repetido y lo manifestado en la vista anterior, pero solo si dichas contradicciones son activadas procesalmente, mediante su incorporación expresa al debate probatorio (por ejemplo, confrontando al testigo con su declaración previa). Lo que se descarta es la existencia de un deber judicial de cotejo de oficio entre ambos juicios.

En el caso concreto, al no haber promovido la defensa la introducción ni confrontación de la declaración prestada en el juicio anulado, ni haber concretado las supuestas contradicciones relevantes, el Tribunal Supremo desestima el recurso y confirma la condena. La sentencia refuerza así el principio de inmediatez y delimita con claridad el régimen probatorio aplicable en los supuestos de repetición del juicio oral tras anulación de la sentencia.

## SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO 957/2025, de 4 de marzo

- **Ponente:** *Excmo. Sr. D. Eduardo de Porres Ortiz de Urbina*
- **Asunto:** *Derecho de defensa y asistencia letrada: requisitos para apreciar una defensa manifiestamente ineficaz*

El Tribunal Supremo analiza la eventual vulneración del derecho fundamental de defensa derivada de la actuación de un abogado de oficio que, conforme a las normas colegiales, no reunía la antigüedad exigida para intervenir en un procedimiento tramitado por sumario ordinario. La cuestión planteada consiste en determinar si dicha irregularidad, unida a la concreta actuación profesional desplegada en el proceso, permite apreciar una defensa manifiestamente deficiente con relevancia constitucional y efectos invalidantes sobre el juicio celebrado.

La Sala Segunda reitera que el derecho a la asistencia letrada garantiza una defensa real y efectiva, pero no ampara una revisión

## SUPREME COURT JUDGMENT No. 175/2025, of 27 February

- **Reporting Judge:** *The Honourable Mr Antonio del Moral García*
- **Subject matter:** *The assessment of evidence following a retrial: the scope of the evidence presented in the first trial, which was overturned*

In this case, the Supreme Court analysed the evidentiary scope of the statements made in a first oral hearing in which the judgment was overturned, when a retrial was ordered before a differently composed court. The question focused on whether the sentencing body in the second trial was obliged to compare the statements made in both trials ex officio, especially for the purpose of assessing contradictions relevant to the credibility of the victim's testimony.

The Second Chamber held that the evidence presented in an overturned trial is not automatically incorporated into the new hearing and loses its probative value if it is not expressly introduced into the second trial by one of the parties. Consequently, a court must base its conviction exclusively on the evidence presented in the trial that gives rise to the judgment, under Article 741 of the Law of Criminal Procedure.

However, the Court noted that there is no theoretical or legal obstacle preventing the parties from asserting possible contradictions between what was stated in the retrial and what was stated in the previous hearing, but only if these contradictions are activated procedurally, by expressly incorporating them into the evidentiary debate (for example, by confronting the witness with his previous statement). However, the Court held that there is no legal obligation for a court to compare the two trials ex officio.

In this specific case, as the defence did not request the introduction or comparison of the statement made in the overturned trial, nor did it specify the alleged relevant contradictions, the Supreme Court dismissed the appeal and upheld the conviction. Thus, the judgment reinforces the principle of immediacy and clearly defines the evidentiary regime applicable in cases of a retrial following the overturning of a judgment.

## SUPREME COURT JUDGMENT No. 957/2025, of 4 March

- **Reporting Judge:** *The Honourable Mr Eduardo de Porres Ortiz de Urbina*
- **Subject matter:** *Rights of defence and legal aid: requirements for a finding that a defence is manifestly ineffective*

In this case, the Supreme Court analysed the possible infringement of the fundamental right to a defence arising from the actions of a public defender who, under the rules of the bar association, did not have the seniority required to participate in proceedings under ordinary summary proceedings. The question raised was whether this irregularity, together with the specific professional conduct displayed in the proceedings, constituted a manifestly deficient defence with constitutional significance that invalidated the trial.

The Second Chamber held that the right to legal aid guarantees a real and effective defence but does not cover a general review

general de la estrategia procesal ni convierte cualquier deficiencia técnica en una lesión del artículo 24 CE. Como regla general, los errores, desaciertos o decisiones tácticas del abogado deben ser asumidos por la parte, salvo que alcancen un nivel de ineptitud objetiva que prive al acusado de una defensa mínimamente eficaz y que, además, dicha situación haya pasado inadvertida o no haya sido corregida por el órgano judicial.

En este sentido, el Tribunal precisa que la infracción de normas colegiales sobre el turno de oficio o la adscripción a listas especializadas no constituye, por sí sola, un parámetro determinante para apreciar la vulneración del derecho de defensa. La habilitación profesional del letrado deriva de su condición de abogado colegiado, y la eventual inobservancia de requisitos internos del turno puede generar responsabilidades disciplinarias, pero no permite presumir automáticamente una actuación procesal ineficaz. La valoración constitucional debe centrarse exclusivamente en la actuación concreta desplegada en el proceso y en su incidencia real sobre el derecho de defensa.

La sentencia delimita así el concepto de defensa manifiestamente ineficaz, que solo concurre cuando se acredita una actuación profesional objetivamente alejada de los estándares mínimos de diligencia exigibles y cuando dicha actuación ha podido influir de forma relevante en el resultado del procedimiento. El análisis debe realizarse desde una perspectiva ex ante, evitando valoraciones retrospectivas condicionadas por el desenlace desfavorable del proceso.

Aplicando estos criterios al caso concreto, el Tribunal Supremo concluye que, aunque la actuación del letrado pudiera haber sido técnicamente mejorable, no se aprecia una carencia sustancial de defensa ni una incidencia decisiva en el fallo condenatorio. El tribunal de instancia valoró adecuadamente la prueba practicada y las alegaciones formuladas, existiendo soporte probatorio suficiente para la condena. En consecuencia, se desestima el recurso de casación y se confirma la sentencia recurrida, reafirmando que solo una ineficacia técnica grave y determinante permite apreciar la vulneración constitucional del derecho de defensa.

---

#### SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO 274/2025, de 26 de marzo

- **Ponente:** *Excmo. Sr. D. Ángel Luis Hurtado Adrián*
- **Asunto:** *Delito contra el ejercicio de los derechos cívicos (art. 542 CP). Alcance del verbo típico “impedir” y carácter residual del tipo penal*

El Tribunal Supremo analiza la condena de un alcalde por un delito contra el ejercicio de los derechos cívicos del artículo 542 CP, derivada de la negativa reiterada, persistente y consciente a facilitar a una concejala de la oposición el acceso a determinados expedientes municipales, pese a las reiteradas solicitudes formales y al conocimiento expreso del derecho de consulta reconocido por la legislación de régimen local.

La Sala Segunda reitera el carácter residual del artículo 542 CP, concebido como una cláusula de cierre destinada a sancionar conductas que, aun no encajando plenamente en otros tipos más es-

of procedural strategy, nor does it convert any technical deficiency into a breach of Article 24 of the Spanish Constitution. As a general rule, a lawyer's errors, mistakes, or tactical decisions must be borne by the party, unless they reach a level of objective ineptitude that deprives the defendant of a minimally effective defence and, moreover, that such a situation has gone unnoticed or has not been corrected by the judicial body.

In this regard, the Court held that the infringement of collegiate rules on the duty to act as a lawyer or the assignment to specialised lists does not, in itself, constitute a decisive parameter for assessing the infringement of the right to a defence. A lawyer's professional qualification derives from his or her status as a member of the bar, and any failure to comply with the internal requirements of the legal profession may give rise to disciplinary liability but does not automatically lead to a presumption of ineffective legal representation. The constitutional assessment must focus exclusively on the specific action taken in the proceedings and its actual impact on the right to a defence.

Therefore, the judgment defines the concept of a manifestly ineffective defence, which only occurs when there is proof of professional conduct that objectively falls short of the minimum standards of diligence required and when such conduct could have had a significant influence on the outcome of the proceedings. The analysis should be carried out from an ex-ante perspective, avoiding retrospective assessments influenced by the unfavourable outcome of the process.

Applying these criteria to the specific case, the Supreme Court concluded that, although the performance of the lawyer could have been technically improvable, there was no evidence of a substantial lack of a defence or a decisive impact on the conviction. The court of first instance properly assessed the evidence presented and the submissions made, and there was sufficient evidence to support the conviction. Consequently, the appeal was dismissed, and the judgment under appeal was upheld, with the Court reaffirming that only a serious and decisive technical inefficiency allows for an assessment of a constitutional infringement of the right to a defence.

---

#### SUPREME COURT JUDGMENT No. 274/2025, of 26 March

- **Reporting Judge:** *The Honourable Mr Ángel Luis Hurtado Adrián*
- **Subject matter:** *Offence against the exercise of civic rights (Article 542 of the Criminal Code). Statutory scope of the verb “impede” and the residual nature of the offence*

In this case, the Supreme Court analysed the conviction of a mayor for an offence against the exercise of civic rights under Article 542 of the Criminal Code, arising from the repeated, persistent, and conscious refusal to provide a councillor from the opposition with access to certain municipal files, despite repeated formal requests and express knowledge of the right of consultation recognised by local government legislation.

The Second Chamber noted the residual nature of Article 542 of the Criminal Code, conceived as a closing clause designed to sanction conduct which, although it does not fully fit into

pecíficos —como la prevaricación administrativa—, suponen una obstaculización grave y consciente del ejercicio de derechos fundamentales o cívicos. En este sentido, recuerda que se trata de una auténtica norma penal en blanco, cuyo contenido se integra fundamentalmente a partir de la Constitución y de las leyes que desarrollan los derechos fundamentales.

En cuanto a la conducta típica, el Tribunal fija un criterio amplio sobre el verbo “impedir”, que no se limita a una prohibición formal o expresa, sino que comprende cualquier actuación u omisión que haga materialmente imposible el ejercicio efectivo del derecho, siempre que provenga de una autoridad o funcionario con competencia funcional para permitirlo o facilitarlo. El impedimento puede manifestarse tanto mediante resoluciones formales como a través de comportamientos obstruccionistas, dilatorios o de abuso de posición institucional.

La sentencia subraya que el tipo penal exige dolo directo, esto es, que la conducta se realice “a sabiendas”, con plena conciencia de la existencia del derecho ajeno y con voluntad de impedir su ejercicio. En el caso enjuiciado, los hechos probados acreditan una actitud contumaz y prolongada de negativa injustificada, reforzada por órdenes verbales y escritas dirigidas al personal municipal para evitar la entrega de la documentación solicitada, lo que excede con claridad de una mera irregularidad administrativa.

Frente al argumento defensivo de que las solicitudes fueron formalmente admitidas, el Tribunal Supremo afirma que ello no es incompatible con la existencia de una obstaculización real y efectiva del derecho de acceso, destacando que el análisis debe centrarse en la posibilidad material de ejercicio del derecho y no en el cumplimiento aparente de trámites formales. Excusas como la dificultad para localizar expedientes o la falta de medios municipales no pueden neutralizar una conducta que los hechos probados califican de injustificada y deliberada.

---

#### SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO 297/2025, de 28 de marzo

- **Ponente:** *Excmo. Sr. D. Manuel Marchena Gómez*
- **Asunto:** *Extemporaneidad en la alegación de nulidad por vulneración del derecho a la inviolabilidad del domicilio y validez de los hallazgos documentales en una entrada y registro*

La Sala Segunda del Tribunal Supremo analiza en esta sentencia el alcance del derecho a la inviolabilidad del domicilio (art. 18 CE) en relación con la impugnación tardía de una diligencia de entrada y registro y la incorporación al proceso de documentos hallados durante su práctica. El recurso de casación se articula sobre la supuesta inexistencia de indicios suficientes para autorizar el registro y la ausencia de un auto ampliatorio que legitimara el hallazgo de documentos no directamente relacionados con el objeto inicial de la diligencia.

El Tribunal comienza reafirmando que, aunque en el proceso penal la vulneración de derechos fundamentales no queda sujeta de forma rígida al principio de preclusión, ello no legitima conductas defensivas basadas en un silencio estratégico que impida el debate contradictorio en tiempo oportuno. La Sala subraya que la nulidad

other more specific offences - such as administrative misconduct in public office -, involves a serious and conscious obstruction of the exercise of fundamental or civic rights. In this respect, the Court stated that it is a genuine “blank” criminal provision, the contents of which are essentially based on the Constitution and the laws that develop fundamental rights.

Regarding the typical conduct, the Court established a broad definition of the verb “impede”, which is not limited to a formal or express prohibition, but includes any action or omission that makes the effective exercise of the right materially impossible, as long as it comes from an authority or official with the functional competence to allow or facilitate it. The impediment can manifest itself through both formal resolutions and through obstructive, dilatory, or abusive institutional behaviour.

The Court stressed that the criminal offence requires direct malice, namely, that the conduct is carried out “knowingly”, with full awareness of the existence of another’s right and with the will to prevent it from being exercised. In the case in question, the proven facts demonstrated a persistent and prolonged attitude of unjustified refusal, reinforced by verbal and written orders to municipal staff to avoid providing the requested documentation, which clearly went beyond a mere administrative irregularity.

Faced with the defence’s argument that the applications were formally admitted, the Supreme Court held that this is not incompatible with the existence of a real and effective obstacle to the right of access, emphasising that the analysis must focus on the material possibility of exercising the right and not on the apparent compliance with formal procedures. Excuses such as the difficulty in locating files or the lack of municipal resources could not neutralise conduct that the proven facts classified as unjustified and deliberate.

---

#### SUPREME COURT JUDGMENT No. 297/2025, of 28 March

- **Reporting Judge:** *The Honourable Mr Manuel Marchena Gómez*
- **Subject matter:** *The late filing of a claim for nullity due to a breach of the right to the inviolability of the dwelling and the validity of documentary findings in a search and seizure*

In this case, the Second Chamber of the Supreme Court analysed the scope of the right to the inviolability of the dwelling (Article 18 of the Spanish Constitution) concerning the late challenge of an entry and search warrant and the inclusion in the proceedings of documents found during the search. The appeal was based on the alleged lack of sufficient evidence to authorise the search and the absence of an order extending the search to legitimise the discovery of documents not directly related to the initial purpose of the search.

The Court began by reaffirming that, although in criminal proceedings the infringement of fundamental rights is not rigidly subject to the principle of preclusion, this does not legitimise defensive conduct that is based on a strategic silence that prevents adversarial debate in a timely manner. The Court

de una diligencia tan relevante como una entrada y registro debe ser alegada tan pronto como la parte tenga conocimiento de los elementos que la fundamentan, y no de forma extemporánea en el trámite de conclusiones definitivas o en el informe oral, cuando el debate probatorio ya ha quedado cerrado.

Desde esta perspectiva, el Tribunal avala el criterio de la Audiencia Provincial al considerar extemporánea la alegación de nulidad, destacando que los indicios que sustentaron la autorización judicial constaban desde el inicio en el sumario y eran plenamente conocidos por la defensa. No se trataba, por tanto, de una vulneración sobrevenida ni revelada por el desarrollo de la prueba en el juicio oral, sino de una cuestión que pudo y debió ser planteada en una fase procesal anterior.

A mayor abundamiento, la Sala analiza el fondo de la queja y concluye que no se produjo vulneración del derecho a la inviolabilidad del domicilio. El auto habilitante estaba apoyado en una base indiciaria suficiente, relacionada con la investigación de delitos graves –estrágos, tenencia de explosivos, amenazas y organización criminal– y con conexiones objetivas entre el acusado y hechos similares investigados en otros países. En este contexto, la posterior debilidad de alguna prueba testifical no deslegitima retrospectivamente la decisión judicial que autorizó la injerencia domiciliaria.

En cuanto a los documentos hallados durante el registro, el Tribunal Supremo declara su válida incorporación al proceso, al considerar que el propio auto autorizaba la aprehensión no solo de armas y explosivos, sino también de documentos y efectos que pudieran constituir instrumentos o pruebas de los delitos investigados. El hallazgo de documentación aparentemente falsa, vinculada al uso de identidades múltiples, guardaba una conexión razonable con el objeto de la investigación y no exigía un auto ampliatorio específico.

---

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 31/2025, de 10 de febrero

- **Asunto:** *Tutela judicial efectiva y derecho a la inviolabilidad del domicilio: control por el juez penal de la validez constitucional de una entrada y registro autorizada en vía contencioso-administrativa y efectos sobre la prueba penal*

El Tribunal Constitucional estima el recurso de amparo interpuesto contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona que anuló una previa absolución penal y ordenó la repetición del juicio, vinculando al nuevo órgano de enjuiciamiento a la validez de una diligencia de entrada y registro acordada años antes por la jurisdicción contencioso-administrativa. La queja se centra en que dicha decisión impidió a la acusada volver a plantear en el nuevo juicio la posible vulneración del derecho a la inviolabilidad del domicilio, privando al juez penal de examinar la licitud constitucional de la prueba de cargo determinante.

La Sala Primera declara vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva por falta de motivación suficiente, en conexión con el derecho a la inviolabilidad del domicilio. Afirma que la Audiencia Provincial partió de una premisa incorrecta al atribuir a la autorización

stressed that the nullity of a measure as significant as an entry and search must be invoked as soon as the party has knowledge of the elements that support it, and not extemporaneously in the final conclusions or in the oral report, when the evidentiary debate has already been closed.

From this perspective, the Court upheld the criteria of the Court of Appeal when it considered the allegation of nullity to be out of time, highlighting that the evidence that supported the judicial authorisation had been on record from the beginning of the investigation and was fully known to the defence. Therefore, it was not a matter of a supervening breach, or one revealed by the development of the evidence at the oral hearing, but a question that could and should have been raised at an earlier stage of the proceedings.

In addition, the Court analysed the merits of the claim and concluded that there was no infringement of the right to the inviolability of the dwelling. The authorising warrant was based on sufficient circumstantial evidence related to the investigation of serious crimes – destruction, possession of explosives, threats, and criminal organisation – and objective connections between the accused and similar acts investigated in other countries. In this context, the subsequent weakness of some witness evidence did not retrospectively delegitimise the judgment authorising the house search.

Regarding the documents found during the search, the Supreme Court declared their valid incorporation into the proceedings and held that the order itself authorised the seizure not only of weapons and explosives but also of documents and effects that could constitute instruments or evidence of the crimes under investigation. The finding of apparently false documentation, linked to the use of multiple identities, had a reasonable connection to the subject matter of the investigation and did not require a specific order to extend the investigation.

---

CONSTITUTIONAL COURT JUDGMENT No. 31/2025, of 10 February

- **Subject matter:** *Effective judicial protection and the right to the inviolability of the dwelling: the criminal court's review of the constitutional validity of an entry and search authorised in contentious-administrative proceedings and the effects on criminal evidence*

The Constitutional Court upheld a constitutional appeal filed against a judgment of the Barcelona Court of Appeal, which overturned a previous criminal acquittal and ordered a retrial, thus obliging the new trial judge to uphold the validity of an entry and search warrant issued years earlier by the contentious-administrative jurisdiction. The appeal focused on the fact that this judgment prevented the defendant from raising the possible violation of the right to the inviolability of the dwelling in the new trial, thereby depriving the criminal judge of the opportunity to examine the constitutional legality of the decisive evidence presented by the prosecution.

The First Chamber held that there had been a breach of the right to effective judicial protection through a failure to provide adequate reasons, relating to the right to the inviolability of the dwelling. The Court stated that the Court of Appeal had star-

firme dictada en vía contencioso-administrativa un efecto de cosa juzgada material que impediría cualquier control posterior por el juez penal. Tal conclusión no se ajusta a la doctrina constitucional, pues el procedimiento de autorización de entrada y registro tiene carácter incidental y limitado, y no puede desplegar un efecto vinculante absoluto sobre un proceso penal posterior en el que se dilucida la existencia de responsabilidad criminal.

El Tribunal Constitucional subraya que la tutela del derecho fundamental del artículo 18.2 CE exige que el órgano penal pueda examinar, desde sus propios parámetros, la legitimidad constitucional de la diligencia de entrada y registro cuando de ella derivan pruebas de cargo decisivas. Negar de forma apriorística esa posibilidad, y obligar al juez del nuevo juicio a asumir sin más la validez de la diligencia, supone una restricción indebida del derecho de defensa y vacía de contenido el control judicial efectivo sobre la licitud de la prueba penal.

En consecuencia, el Tribunal Constitucional anula la sentencia de apelación y el auto resolutorio del incidente de nulidad, ordenando la retroacción de actuaciones para que se dicte una nueva resolución respetuosa con los derechos fundamentales lesionados. La sentencia fija así una doctrina de alcance práctico relevante: la autorización de una entrada y registro en vía contencioso-administrativa no impide que el juez penal examine su conformidad constitucional cuando esa diligencia condiciona decisivamente el acervo probatorio del proceso penal.

#### SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO 317/2025, de 3 de abril

- **Ponente:** *Excmo. Sr. D. Pablo Llarena Conde*
- **Asunto:** *Plazos de instrucción (art. 324 LECrim): efectos de las diligencias extemporáneas, imputación tardía e impacto constitucional en el derecho de defensa*

La Sala Segunda revisa una absolución fundada en la nulidad de declaraciones y diligencias practicadas fuera de plazo, en un procedimiento complejo con sucesivas ampliaciones del objeto investigado. El Tribunal fija como marco que los plazos del art. 324 LECrim responden a una legalidad ordinaria orientada a evitar dilaciones indebidas, pero no operan como causa de extinción de la responsabilidad penal ni determinan automáticamente la nulidad constitucional de todo lo actuado fuera de término.

Desde esa premisa, la sentencia distingue con precisión entre diligencias extemporáneas y lesión del derecho de defensa. Las diligencias acordadas fuera de plazo son irregulares y carecen de eficacia para la instrucción, pero no generan por sí mismas ilicitud constitucional ni contaminan necesariamente la prueba que pueda aportarse al plenario, siempre que no produzcan indefensión material y la apertura del juicio oral descansa en otros elementos válidos.

El núcleo decisivo se sitúa en la inculpación tardía. La Sala afirma que incorporar a un investigado una vez precluida la fase de ins-

ted from an incorrect premise by attributing *res judicata* effects to the final authorisation issued in contentious-administrative proceedings that would prevent any subsequent review by the criminal judge. This conclusion was inconsistent with constitutional case law, as the procedure for authorising entry and search was incidental and limited in nature and could not have an absolute binding effect on subsequent criminal proceedings in which criminal liability was being determined.

The Constitutional Court stressed that the protection of the fundamental right under Article 18.2 of the Spanish Constitution requires that the criminal court be able to examine, based on its own parameters, the constitutional legitimacy of the search and seizure when decisive evidence for the prosecution flows from it. To reject this possibility a priori and to oblige the judge in the new trial to simply accept the validity of the proceedings constitutes an undue restriction of the right to a defence and renders effective judicial control over the legality of criminal evidence meaningless.

Consequently, the Constitutional Court overturned the appeal judgment and the judgment on the motion to dismiss, remitting the case to the lower court in order to issue a new judgment in accordance with the fundamental rights that had been violated. Thus, the judgment establishes a doctrine of significant practical scope: the authorisation of an entry and search in contentious-administrative proceedings does not prevent a criminal judge from examining its constitutionality when this procedure has a decisive bearing on the body of evidence in criminal proceedings.

#### SUPREME COURT JUDGMENT No. 317/2025, of 3 April

- **Reporting Judge:** *The Honourable Mr Pablo Llarena Conde*
- **Subject matter:** *Preliminary investigation deadlines (Article 324 of the Law of Criminal Procedure): The effects of out-of-time proceedings, a delayed indictment, and the constitutional impact on the right to a defence*

In this case, the Second Chamber reviewed an acquittal based on the nullity of declarations and proceedings carried out outside the time limit, in a complex procedure with successive extensions of the object under investigation. The Court established that the time limits under Article 324 of the Law of Criminal Procedure are part of ordinary procedural law aimed at avoiding undue delays, but do not function as a ground for the extinguishment of criminal liability, nor do they automatically establish the constitutional nullity of all proceedings carried out after the deadline.

Based on this premise, the Court drew a precise distinction between proceedings conducted outside the deadline and the infringement of the right to a defence. Proceedings that are conducted out of time are irregular and lack effectiveness for the pre-trial investigation phase, but they do not themselves give rise to unconstitutionality nor do they necessarily taint the evidence that may be submitted at the trial, as long as they do not result in material defencelessness and the opening of the oral hearing is based on other valid elements.

The decisive factor lies in the late filing of charges. The Chamber held that adding an accused to proceedings after the pre-trial pha-

trucción vulnera el principio de igualdad de armas y puede causar indefensión constitucional, al privarle de intervenir en la investigación y de promover diligencias de descargo. En cambio, una declaración extemporánea no es inválida cuando el investigado conocía previamente la existencia del procedimiento, su condición procesal y sus derechos, y pudo intervenir en la causa, quedando la extemporaneidad reducida a una irregularidad sin relevancia constitucional.

Aplicando esta doctrina al caso, el Tribunal aprecia que determinados hechos iniciales no podían ser enjuiciados por haberse producido una inculpación tardía sin ampliación válida del objeto ni del plazo de investigación, lo que generó indefensión. Sin embargo, válida la investigación y el enjuiciamiento de hechos nuevos descubiertos posteriormente, al constituir un nuevo espacio objetivo de investigación con derecho a un plazo íntegro propio. La sentencia estima parcialmente el recurso del Ministerio Fiscal, anula la absolucón y ordena retroacción para que el tribunal de instancia valore la acusación y la prueba conforme a estos criterios.

---

#### SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO 327/2025, de 9 de abril

- **Ponente:** *Excmo. Sr. D. Vicente Magro Servet*
- **Asunto:** *delimitación entre estafa y mero incumplimiento contractual (dolo penal frente a dolo civil)*

La STS 1488/2025 aborda nuevamente la frontera entre el incumplimiento contractual civil y el delito de estafa, poniendo el acento en la existencia de dolo penal concurrente o antecedente al momento del desplazamiento patrimonial. El recurso se articula, entre otros motivos, por vulneración de la presunción de inocencia y por entender la defensa que los hechos debieron reconducirse a la vía civil, al tratarse –a su juicio– de un incumplimiento contractual sin relevancia penal

El Tribunal Supremo reitera que no todo incumplimiento contractual es penalmente relevante, pero sí lo es cuando el contrato actúa como instrumento engañoso, es decir, cuando el autor aparenta una voluntad seria de cumplimiento que en realidad no existe, induciendo a error a la víctima y provocando un desplazamiento patrimonial con ánimo de lucro. En estos supuestos, el negocio jurídico no desaparece, pero queda “criminalizado” por la concurrencia de un engaño bastante que vicia el consentimiento desde el inicio o en el momento determinante del perjuicio.

La Sala insiste en que el dolo penal se caracteriza por su carácter antecedente o concurrente al engaño, sin que baste un dolo meramente sobrevenido propio del incumplimiento civil. No obstante, recuerda que la jurisprudencia admite también supuestos de dolo penal subsecuente, cuando, aun naciendo el contrato de forma válida, el autor, consciente de que no podrá o no querrá cumplir, mantiene la apariencia de normalidad contractual para seguir obteniendo ventajas patrimoniales.

En el caso concreto, el Tribunal aprecia la existencia de engaño bastante y dolo defraudatorio, destacando la actividad previa desplegada para generar confianza, la ausencia total de actos reales de

se has ended violates the principle of equality of arms and may give rise to constitutional defencelessness by depriving him or her of the right to participate in the investigative phase and to submit exculpatory evidence. On the other hand, a statement made after the deadline is not invalid when an accused was previously aware of the existence of the proceedings, their procedural status, and their rights, and was able to participate in the case, with the late filing being reduced to a constitutionally irrelevant irregularity.

Applying this principle to the case, the Court found that certain initial acts could not be prosecuted because charges were filed late without a valid extension of the purpose and time limit of the investigation, which led to the defendant being left defenceless. However, the Court upheld the validity of the investigation and the prosecution of new facts discovered at a later stage, as it constituted a new objective area of investigation with its own separate time limit. The judgment partially upheld the appeal by the Public Prosecutor's Office, overturned the acquittal, and ordered the proceedings to be remitted to the lower court to allow the trial judge to assess the charges and the evidence in accordance with these criteria.

---

#### SUPREME COURT JUDGMENT No. 327/2025, of 9 April

- **Reporting Judge:** *The Honourable Mr Vicente Magro Servet*
- **Subject matter:** *Distinguishing between fraud and a mere breach of contract (criminal versus civil fraud)*

Supreme Court Judgment No. 1488/2025 once again addressed the distinction between civil breach of contract and the crime of fraud, emphasising the existence of concurrent or prior criminal intent at the time of the transfer of assets. The appeal was based, among other grounds, on a violation of the presumption of innocence and on the defence's view that the case should have been referred to the civil courts, as it was, in its opinion, a breach of contract without criminal significance.

The Supreme Court held that not every breach of contract is criminally significant, but it is significant when the contract functions as a misleading instrument, i.e. when the perpetrator appears to have a serious intent to perform that in reality does not exist, misleading the victim and causing a transfer of assets for profit. In these cases, the legal transaction does not disappear, but it is “criminalised” by the existence of a sufficient deception that vitiates the consent from the beginning or at the decisive moment of the damage.

The Court noted that criminal intent is characterised by its prior or contemporaneous nature in relation to the deception, and that mere supervening intent, which is typical of a civil breach, is not sufficient. However, the Court held that case law also permits cases of subsequent criminal fraud, when, although the contract was validly created, the perpetrator, aware that he will not be able or will not want to fulfil it, maintains the appearance of a normal contract in order to continue obtaining financial advantages.

In the specific case, the Court found that there had been sufficient deception and fraudulent intent, highlighting the prior activity carried out to create confidence, the total absence of real

cumplimiento tras el primer pago y la desaparición del acusado, elementos que descartan la tesis del mero incumplimiento contractual. La valoración probatoria de la instancia se considera suficiente, lógica y respetuosa con las exigencias del derecho a la presunción de inocencia.

En conclusión, la sentencia consolida una doctrina ya estable: la clave para diferenciar la estafa del ilícito civil reside en la tipicidad penal del engaño y en la acreditación de un dolo penal que antecede o acompaña al desplazamiento patrimonial. El Derecho penal actúa así como última ratio, pero con plena legitimidad cuando el contrato se utiliza como mera pantalla para una maniobra defraudatoria.

#### SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO 372/2025, de 11 de abril

- **Ponente:** *Excmo. Sr. D. Manuel Marchena Gómez*
- **Asunto:** *Responsabilidad penal de la persona jurídica: prohibición de heteroresponsabilidad, exigencia de hecho propio (art. 31 bis CP) y carga de la prueba del “defecto de organización”*

La Sala Segunda revisa la condena impuesta a una mercantil junto con su administrador por un delito de estafa, y aprovecha el caso para reafirmar con contundencia el modelo español de responsabilidad penal corporativa: la persona jurídica no responde penalmente por simple arrastre de la conducta del directivo. El Tribunal rechaza cualquier enfoque vicarial o de “traslación automática” del hecho del administrador a la sociedad, recordando que la responsabilidad corporativa se asienta en un hecho propio de la entidad, no en una mera imputación por representación.

El eje de esa autorresponsabilidad se sitúa en el defecto estructural de organización y control. La sentencia precisa que el “hecho de conexión” (el delito cometido por la persona física en el seno de la empresa) es condición necesaria, pero no suficiente: la condena de la persona jurídica exige acreditar, además, el presupuesto específico del art. 31 bis CP, esto es, que el delito fue posible por la falta de medidas de vigilancia y control adecuadas, o por la inexistencia / ineficacia de modelos de prevención. En consecuencia, el enjuiciamiento penal de la entidad requiere un juicio autónomo sobre su estructura de cumplimiento, y no puede descansar en formulaciones genéricas.

Desde esa doctrina, el Tribunal fija una consecuencia práctica decisiva: corresponde a la acusación probar el delito corporativo en sus elementos propios, sin invertir la carga mediante presunciones basadas en que sí delinque el directivo, delinque la empresa, ni suplir con meras inferencias la ausencia de base fáctica. La Sala enfatiza, además, la necesidad de preservar un estatuto de garantías real para la persona jurídica, alertando del riesgo de confusión cuando la defensa de la empresa se diluye en la defensa del directivo, precisamente porque el juicio de imputación a la entidad exige una argumentación y un material probatorio específicos.

Aplicando estos criterios, el Tribunal Supremo mantiene la condena del administrador, pero casa la sentencia respecto de la mercan-

acts of performance after the first payment, and the disappearance of the defendant, elements that ruled out the possibility of mere breach of contract. The assessment of the evidence by the court was considered sufficient, logical, and consistent with the requirements of the right to the presumption of innocence.

In conclusion, the judgment consolidates an already established doctrine: the key to differentiating fraud from civil wrongdoing lies in the criminal nature of the deception and in the proof of criminal intent, which precedes or accompanies the transfer of assets. Therefore, criminal law functions as a last resort, but with full legitimacy when a contract is used as a mere cover for a fraudulent transaction.

#### SUPREME COURT JUDGMENT No. 372/2025, of 11 April

- **Reporting Judge:** *The Honourable Mr Manuel Marchena Gómez*
- **Subject matter:** *Criminal liability of a legal person: prohibition against derivative corporate liability, the requirement that the act be committed by the legal person itself (Article 31 bis of the Criminal Code), and the burden of proof of the “organisational defect”*

The Second Chamber reviewed the conviction of a company and its director for the crime of fraud and used the case to emphatically reaffirm the Spanish model of corporate criminal liability: a legal person is not criminally liable simply because of the conduct of an executive. The Court rejected any derivative or “automatic transfer” approach whereby the actions of the director could be attributed to the company, noting that corporate liability is based on the entity’s own actions, not on mere imputation by representation.

The basis for this direct liability lies in structural defects in organisation and control. The Court held that the “connecting factor” (the offence committed by the individual within the company) was a necessary but not sufficient requirement: the conviction of a legal person also requires proof of the specific requirement of Article 31 bis of the Criminal Code, i.e. that the offence was made possible by the lack of adequate oversight and control measures, or by the absence/ineffectiveness of prevention models. Consequently, the criminal prosecution of an entity requires an independent assessment of its compliance structure and cannot be based on generic formulations.

Based on this doctrine, the Court established a decisive practical consequence: the prosecution must establish the elements of the corporate crime, without reversing the burden of proof by making assumptions based on the idea that if an executive commits a crime, the company also commits a crime, or by using mere inferences to compensate for the absence of a factual basis. The Court also emphasised the need to preserve a genuine system of safeguards for legal entities, warning of the risk of confusion when a company’s defence is diluted by its executive’s defence, precisely because the trial of the entity requires specific arguments and evidence.

In applying these criteria, the Supreme Court upheld the conviction of the director but overturned the judgment against the company

til y dicta pronunciamiento absolutorio para la persona jurídica, al constatar que el relato fáctico no contenía una base mínimamente suficiente sobre el defecto de control, la ausencia o ineficacia de *compliance*, o cualquier otro elemento que permitiera afirmar un hecho propio imputable a la entidad conforme al art. 31 *bis* CP. La resolución refuerza así una línea jurisprudencial de especial utilidad: no hay condena penal de la persona jurídica sin un juicio autónomo y probado de imputación corporativa.

#### SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO 2569/2025, de 10 de junio

- **Ponente:** *Excmo. Sr. D. Javier Hernández García*
- **Asunto:** “*Contratos criminalizados*” y estafa: *confirmación de tipicidad por engaño bastante; y restricción del concepto de documento mercantil a efectos penales, con consunción respecto de la estafa*

El Tribunal Supremo resuelve un recurso de casación interpuesto contra una condena por estafa (art. 248 CP, con agravación del art. 250.1.5<sup>a</sup>) en concurso con falsedad, en un supuesto de “pantalla societaria” creada para aparentar un negocio vinculado a una multinacional alemana y contratar una campaña publicitaria que fue ejecutada por la empresa perjudicada sin cobrar el precio pactado. La Sala valida el relato fáctico de instancia como un ejemplo nítido de contrato instrumentalizado: el desplazamiento patrimonial se explica exclusivamente por un engaño antecedente y suficiente, no por un mero incumplimiento posterior.

En el plano probatorio y casacional, la sentencia es especialmente severa con la técnica impugnatoria: recuerda que la denuncia de presunción de inocencia exige identificar con precisión los errores valorativos y atacar la motivación de la sentencia recurrida, no limitarse a fórmulas genéricas. Con ello, confirma que el engaño fue bastante y causalmente determinante, resaltando que se construyó una apariencia comercial reforzada por la invocación a un tercero reputado, lo que desincentivó estrategias de autoprotección de la empresa víctima y explica la ejecución del servicio.

La aportación central de la resolución se produce, sin embargo, en la falsedad: el Tribunal casa parcialmente la condena por falsedad en documento mercantil al aplicar la doctrina del Pleno (STS 232/2022), que impone una interpretación restrictiva del “documento mercantil” a efectos penales. Solo lo serán aquellos documentos con una proyección cualificada en el tráfico jurídico-mercantil y capacidad de afectar de modo supraindividual a la seguridad del tráfico. En cambio, contratos, presupuestos, albaranes o justificantes referidos a relaciones bilaterales carecen, por regla general, de esa idoneidad lesiva colectiva.

Aplicando ese estándar, la Sala concluye que el contrato suscrito –aunque entre comerciantes y con contenido propio de una relación mercantil– no tenía eficacia más allá de la relación inter partes ni potencialidad para lesionar la seguridad del tráfico mercantil en sentido colectivo, por lo que, de existir falsedad, esta sería de documento privado. Y ello arrastra, además, una consecuencia de

and acquitted the legal entity, having found that the factual account did not contain an adequate basis for the lack of control, the absence or ineffectiveness of compliance, or any other element that would allow a conclusion to be drawn that the entity was guilty of an offence under Article 31 *bis* of the Criminal Code. Thus, the judgment reinforces a particularly useful body of case law: a legal entity cannot be convicted without an independent and evidentially substantiated finding of corporate criminal liability.

#### SUPREME COURT JUDGMENT No. 2569/2025, of 10 June

- **Reporting Judge:** *The Honourable Mr Javier Hernández García*
- **Subject matter:** “*Criminalised contracts*” and fraud: *confirmation of the offence based on sufficiently serious deception; and a restrictive interpretation of the concept of a commercial document for the purposes of criminal law, with the latter being absorbed by the offence of fraud*

The Supreme Court ruled on an appeal against a conviction for fraud (Article 248 of the Criminal Code, with aggravation of Article 250.1.5<sup>a</sup>) in conjunction with falsehood, in a case of a “corporate front” created to give the impression of a business linked to a German multinational and to contract an advertising campaign that was carried out by the aggrieved company without charging the agreed price. The Court accepted the factual account of the case as a clear example of a contract used as an instrument for fraud: the transfer of assets is explained exclusively by prior and sufficient deception, not by mere subsequent non-performance.

In terms of evidence and grounds for appeal, the judgment is particularly stringent regarding the strategy adopted to challenge the judgment: it notes that the presumption of innocence requires the precise identification of errors of assessment and a challenge to the reasoning of the judgment under appeal, rather than merely relying on generic formulas. In doing so, the Court confirmed that the deception was sufficient and decisive, highlighting that the appearance of a business was constructed and reinforced by referring to a reputable third party, which discouraged the company that was the victim of the fraud from implementing strategies to protect itself and led to the performance of the service.

The key element of the judgment, however, concerns falsification: the Court partially overturned the conviction for the falsification of a commercial document by applying the doctrine of the Plenary (SCJ No. 232/2022), which applied a restrictive interpretation to the term “commercial document” for criminal purposes. Only documents that have a particularly significant role in legal and commercial dealings, and that are capable of affecting the security of transactions beyond the individual sphere, will qualify as such. In contrast, contracts, estimates, delivery notes, or receipts relating to bilateral relationships generally lack this capacity to cause collective harm.

Applying this standard, the Court concluded that the contract that was signed – although between commercial operators and with contents typical of a commercial relationship – had no effect beyond the relationship between the parties and no potential to harm the security of commercial traffic in a collective sense, meaning that, if there was any falsification, it

concurso de normas: la falsedad privada queda absorbida por concunción cuando el perjuicio perseguido con la falsedad se confunde con el perjuicio patrimonial propio de la estafa consumada. En consecuencia, se mantiene la condena por estafa y se absuelve del delito de falsedad en documento mercantil, extendiendo el efecto a la coacusada no recurrente.

#### SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO 2876/2025, de 19 de junio

- **Ponente:** *Excma. Sra. D<sup>a</sup>. Carmen Lamela Díaz*
- **Asunto:** *Delito contra los derechos de los trabajadores (art. 316 CP): Sujeto obligado y “posición de garante” en prevención de riesgos, validez de la delegación empresarial y responsabilidad del técnico de PRL*

La Sala Segunda conoce del recurso de casación formulado por la acusada, técnico de seguridad y salud en el trabajo y máxima responsable en el área de prevención de riesgos laborales de una fundación gestora de un centro de internamiento de menores. Tras un accidente laboral grave por caída en altura durante el cambio de banderas, la sentencia de apelación mantuvo la condena por el art. 316 CP y absolvió del delito de lesiones imprudentes. La recurrente sostiene que su condena se apoya indebidamente en su cualificación profesional, cuando el deber de garante correspondería al empresario, salvo delegación real, efectiva y material.

El Tribunal Supremo reitera que el art. 316 CP es una norma penal en blanco y sanciona a quien, estando legalmente obligado, no facilita los medios necesarios para que la actividad se desarrolle con seguridad, generando un peligro grave. Ahora bien, precisa que el deber originario corresponde al empresario (arts. 14 y 15 LPRL), pero puede operar una delegación válida y efectiva (art. 30 LPRL) en personal cualificado, siempre que sea formal, documentada y acompañada de la dotación de medios y del deber de supervisión, sin que la eventual responsabilidad del empresario excluya la del delegado si este incumple su ámbito funcional de garantía.

Aplicando estos parámetros, la Sala asume el hecho probado: la acusada fue contratada precisamente para asumir funciones preventivas amplias (proponer acciones, coordinar con el servicio ajeno, evaluar riesgos y llevar a cabo medidas preventivas) y, conociendo el carácter genérico e insuficiente de la evaluación emitida por el servicio externo, no la adaptó al centro ni contempló tareas periódicas y notorias con riesgo de caída en altura (como el cambio de banderas), omitiendo procedimientos de trabajo y medidas de protección. El Tribunal destaca además que la entidad proporcionó información y acceso al centro y que la acusada realizó visitas, por lo que la tesis de la falta de medios o de desconocimiento del riesgo no encaja con el relato fáctico.

En el plano casacional, la sentencia es clara al rechazar que la vía del art. 849.1 LECrim pueda utilizarse para reabrir la valoración de la prueba o discutir el *factum* bajo una apariencia de infracción de ley. El recurso, en realidad, pretendía contradecir los hechos probados y desplazar la responsabilidad a terceros. Concluye por

would be in a private document. This also has a consequence in terms of the conflict of laws: private forgery is absorbed by consumption when the damage sought through the forgery is confused with the financial damage inherent in the fraud that has been committed. Consequently, the conviction for fraud was upheld, and the defendant was acquitted of the offence of forgery of a commercial document, with the same judgment also applying to the co-defendant, who did not appeal.

#### SUPREME COURT JUDGMENT No. 2876/2025, of 19 June

- **Reporting Judge:** *The Honourable Ms Carmen Lamela Díaz*
- **Subject matter:** *Offence against workers’ rights (Article 316 of the Criminal Code): Obligated subject and “guarantor position” in risk prevention, validity of the company delegation and liability of the occupational risk prevention technician*

In this case, the Second Chamber heard an appeal brought by a defendant, an occupational health and safety technician and head of the occupational risk prevention area of a foundation that managed a juvenile detention centre. Following a serious accident at work due to a fall from a height during the changing of flags, the appeal judgment upheld the conviction under Article 316 of the Criminal Code and acquitted the defendant of the offence of reckless injury. The appellant argued that her conviction was unduly based on her professional qualifications, when the duty of guarantor should have fallen to the employer, unless there was a real, effective, and material delegation of authority.

The Supreme Court reiterated that Article 316 of the Criminal Code is a “blank” criminal law and punishes anyone who, being legally obliged to do so, does not provide the necessary means for the activity to be carried out safely, thus creating a serious danger. However, it specifies that the original duty lies with the employer (Articles 14 and 15 of the Law on the Prevention of Labour Risks (“LPRL”)), but valid and effective delegation (Article 30 of the LPRL) to qualified personnel can take place, provided that it is formal, documented and accompanied by the provision of resources and the duty of supervision, without the possible liability of the employer precluding that of the delegate if he/she fails to comply with his/her functional scope of guarantee.

Applying these parameters, the Court accepted the proven fact: the defendant was hired precisely to take on broad preventive functions (proposing actions, coordinating with external services, assessing risks and implementing preventive measures) and, knowing the generic and insufficient nature of the assessment issued by the external service, she did not adapt it to the centre or consider periodic and obvious tasks with a risk of falling from a height (such as changing flags), omitting work procedures and protective measures. The Court also highlighted the fact that the entity provided information and access to the centre and that the defendant visited, meaning that the assertion of a lack of resources or ignorance of the risk was not supported by the facts.

In terms of the appeal, the judgment is clear in rejecting the argument that Article 849.1 of the Law of Criminal Procedure can be used to reopen the assessment of evidence or to discuss the factual findings under the appearance of a breach of the law. In reality, the appeal sought to contradict the proven

ello que la condena por el art. 316 CP es correcta, desestima el recurso e impone costas, consolidando un criterio práctico relevante: cuando el técnico de PRL asume por delegación efectiva la máxima responsabilidad preventiva, puede ser sujeto activo del art. 316 CP si omite la identificación y control de riesgos graves, sin que baste invocar de forma abstracta la garantía originaria del empresario.

---

#### SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO 3276/2025, de 9 de julio

- **Ponente:** *Excmo. Sr. D. Vicente Magro Servet*
- **Asunto:** *Atenuante de dilaciones: exigencia de motivación, concreción de periodos de paralización y “plazo razonable”*

La Sala Segunda estima el recurso del Ministerio Fiscal contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Tarragona que, de oficio, había aplicado la atenuante simple de dilaciones indebidas y reducido la pena impuesta por un delito de falsedad documental (de 9 a 6 meses de prisión, con correlativa reducción de multa). El Tribunal parte de que la atenuante del art. 21.6 CP no puede operar con automatismo por el mero transcurso del tiempo, sino que exige una dilación extraordinaria, indebida y no atribuible al acusado, además de una falta de proporción con la complejidad del procedimiento.

El núcleo del reproche es doble. En primer lugar, la Audiencia no incorporó al *factum* ningún dato que permitiera sostener la atenuante (no fijó con precisión los periodos de paralización ni un “plus” de anormalidad), limitándose a calificar de “tiempo inadmisibles” lapsos que podían responder a tiempos ordinarios de señalamiento y tramitación. En segundo lugar, la Sala utiliza como criterio orientador los márgenes medios de duración de procedimientos en juzgados de lo penal (referencias del CGPJ) para concluir que los periodos señalados por la Audiencia no se situaban fuera de parámetros de normalidad ni evidenciaban abandono o retraso extraordinario.

Con esa base, el Tribunal casa la sentencia únicamente en lo relativo a la atenuante y dicta segunda sentencia restaurando la condena originaria del juzgado de lo penal (nueve meses de prisión y ocho meses de multa). La resolución refuerza una idea práctica: la dilación indebida relevante a efectos del art. 21.6 CP exige identificación concreta de los tiempos muertos, motivación material sobre su carácter extraordinario y explicación del perjuicio o debilitamiento de la necesidad de pena.

---

#### SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO 3268/2025, de 10 de julio

- **Ponente:** *Excmo. Sra. D<sup>a</sup>. Carmen Lamela Díaz*
- **Asunto:** *tentativa relativamente inidónea frente a tentativa absolutamente inidónea*

La Sala Segunda estima el recurso de casación interpuesto por varias mercantiles querellantes contra el auto de la Audiencia Provincial de Barcelona que había acordado el sobreseimiento

facts and shift liability to third parties. Therefore, the Court concluded that the conviction under Article 316 of the Criminal Code was correct, dismissed the appeal and awarded costs against the appellant, reinforcing an important practical guideline: when an occupational health and safety technician effectively assumes the highest level of preventive responsibility, they may be subject to Article 316 of the Criminal Code if they fail to identify and control serious risks, and it is not sufficient to invoke the employer’s original guarantee in an abstract manner.

---

#### SUPREME COURT JUDGMENT No. 3276/2025, of 9 July

- **Reporting Judge:** *The Honourable Mr Vicente Magro Servet*
- **Subject matter:** *Mitigating factor for delays: requirement to state reasons, specification of standstill periods, and “reasonable deadline”*

The Second Chamber upheld an appeal by the Public Prosecutor’s Office against a judgment of the Tarragona Court of Appeal, which, ex officio, had applied the ordinary mitigating factor of undue delay and reduced the sentence imposed for the offence of false documentation (from 9 months to 6 months imprisonment, with a corresponding reduction in the fine). The Court proceeded on the basis that the mitigating circumstance of Article 21.6 of the Criminal Code cannot operate automatically simply because of the passage of time, but requires an extraordinary, undue delay that is not attributable to the accused, as well as a lack of proportionality to the complexity of the proceedings.

The essence of the criticism was twofold. Firstly, the Court did not include in the set of facts any information that would support the mitigating circumstance (it did not establish with precision the stoppage periods or a “plus” of abnormality), limiting itself to describing as “inadmissible time” periods that could correspond to ordinary times of notification and processing. Secondly, the Court used the average length of proceedings in criminal courts (General Council of the Judiciary references) as a guiding criterion to conclude that the periods stated by the Court were not outside normal parameters and did not show evidence of abandonment or extraordinary delay.

On that basis, the Court overturned the sentence only with regard to the mitigating factor and handed down a second judgment which restored the original sentence of the criminal court (a prison sentence of 9 months and a fine of 8 months). The judgment reinforces a practical idea: undue delay for the purposes of Article 21.6 of the Criminal Code requires specific identification of the time lost, material justification for its extraordinary nature, and an explanation of the damage or weakening of the need for punishment.

---

#### SUPREME COURT JUDGMENT No. 3268/2025, of 10 July

- **Reporting Judge:** *The Honourable Ms Carmen Lamela Díaz*
- **Subject matter:** *a relatively unsuitable attempt versus an absolutely unsuitable attempt*

The Second Chamber upheld the appeal lodged by several plaintiff companies against the order of the Barcelona Court of Appeal, which had ordered the dismissal and closure of a

libre y archivo, en una causa por tentativa de revelación de secretos empresariales. Los hechos indiciarios parten de intrusiones detectadas en un dispositivo de almacenamiento conectado al servidor compartido de las empresas (intentos de acceso a bases de datos con listas de clientes y documentación sensible), realizados con credenciales del exresponsable informático y desde la IP del domicilio de la otra investigada. El acceso no se consumó porque la empresa había implantado doble autenticación y modificado las contraseñas, circunstancia desconocida por los investigados.

El núcleo jurídico es la distinción entre tentativa absolutamente inidónea (impune) y tentativa relativamente inidónea (punible). El Tribunal recuerda que la punibilidad exige una valoración objetiva ex ante: basta con que los actos ejecutivos, atendido el contexto, sean abstracta y racionalmente aptos para lesionar o poner en peligro el bien jurídico. Desde esa perspectiva, intentar acceder a una base de datos con una contraseña “*caducada o modificada*” no permite afirmar, sin más y en fase embrionaria, una inidoneidad absoluta. Al contrario, para un observador objetivo puede ser concebible ex ante que las credenciales asignadas permitan el acceso, siendo el fracaso debido a una circunstancia ajena a la voluntad de los autores (el cambio de claves).

En consecuencia, la Sala concluye que no era correcto clausurar el procedimiento por inexistencia de tentativa punible y deja sin efecto el sobreseimiento libre, ordenando continuar la tramitación conforme al auto del instructor que acordó seguir por procedimiento abreviado.

#### SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO 3819/2025, de 29 de julio

- **Ponente:** *Excmo. Sr. D. Julián Sánchez Melgar*
- **Asunto:** *Plazos de instrucción (art. 324 LECrim): diligencias extemporáneas, efectos preclusivos y límites de la nulidad*

La Sala Segunda resuelve varios motivos de casación centrados en la supuesta nulidad del procedimiento por incumplimiento del art. 324 LECrim (falta de prórroga y práctica de diligencias tras el vencimiento del plazo). El Tribunal parte de que el precepto persigue ordenar temporalmente la fase de investigación, pero su infracción no determina de modo automático la nulidad constitucional del proceso ni una absolucón “por caducidad” si la causa contaba ya con sustento indiciario suficiente.

La sentencia reitera que el efecto preclusivo del art. 324 LECrim se proyecta sobre las diligencias de investigación: las acordadas fuera de plazo son irregulares e ineficaces para fundamentar decisiones instructoras (especialmente la prosecución del procedimiento), pero esa invalidez es limitada y no se confunde con ilicitud constitucional. En particular, el Tribunal subraya que el art. 324 LECrim no “caduca” el juicio oral: la prueba practicada con intermediación y contradicción en el plenario mantiene su propio estatuto y no queda automáticamente contaminada por defectos temporales de la instrucción, salvo que se genere una indefensión material efectiva.

case involving an attempt to disclose trade secrets. The circumstantial evidence was based on intrusions detected in a storage device connected to the companies’ shared server (attempts to access databases containing customer lists and sensitive documentation), carried out using the credentials of the former IT manager and from the IP address of the other person under investigation. Access was not granted because the company had implemented double authentication measures and changed the passwords, a fact unknown to those under investigation.

The key legal issue in this case was the distinction between an entirely futile attempt (which is not punishable) and a relatively futile attempt (which is punishable). The Court noted that determining whether an act is punishable requires an objective assessment ex ante: it is sufficient that the acts carried out, given the context, are abstractly and rationally capable of harming or endangering the legal right. From this perspective, trying to access a database with an “*expired or modified*” password does not, without further consideration and at an embryonic stage, make it possible to assert absolute inadequacy. On the contrary, for an objective observer, it may be conceivable ex ante that the assigned credentials allowed access, with the failure being due to a circumstance beyond the authors’ control (the change of keys).

Consequently, the Court concluded that it was wrong to terminate the proceedings due to the absence of a punishable attempt and overturned the dismissal, ordering the proceedings to continue in accordance with the investigating judge’s order to proceed with summary proceedings.

#### SUPREME COURT JUDGMENT No. 3819/2025, of 29 July

- **Reporting Judge:** *The Honourable Mr Julián Sánchez Melgar*
- **Subject matter:** *Preliminary investigation periods (Article 324 of the Law of Criminal Procedure): out-of-time proceedings, preclusive effects and limits of nullity*

The Second Chamber ruled on several grounds of appeal that focused on the alleged nullity of the proceedings due to non-compliance with Article 324 of the Law of Criminal Procedure (failure to extend the time limit and conduct proceedings after the time limit had expired). The Court proceeded from the premise that the provision seeks to temporarily regulate the investigation phase, but its breach does not automatically result in the constitutional nullity of the proceedings or an acquittal “due to expiry” if the case already had sufficient circumstantial evidence.

The Court reiterated that the preclusive effect of Article 324 of the Law of Criminal Procedure applies to investigative proceedings: those agreed upon after the deadline are irregular and ineffective for supporting investigative judgments (especially the continuation of the proceedings), but this invalidity is limited and should not be confused with constitutional illegality. In particular, the Court emphasised that Article 324 of the Law of Criminal Procedure does not cause the oral hearing to “expire”: evidence taken in the presence of the parties and subject to cross-examination in the plenary session retains its own status and is not automatically contaminated by defects related to time limits in the investigation, unless this results in effective material defencelessness.

Por último, la Sala precisa dos reglas prácticas relevantes en la aplicación del art. 324 LECrim. La primera, que el instructor puede practicar actuaciones encaminadas a delimitar si lo que aparece con posterioridad es mera consecuencia de lo ya investigado o una verdadera ampliación del objeto. La segunda, que cuando se amplía objetivamente la investigación o se incorpora un nuevo investigado, el plazo debe computarse de forma que no se produzcan arrastres temporales indebidos, permitiendo un espacio instructor propio.

---

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO 3748/2025, de 30 de julio

- **Ponente:** *Excma. Sra. D<sup>a</sup>. Ana María Ferrer García*
- **Asunto:** *Falsedad documental*

La Sala Segunda confirma, entre otros pronunciamientos, la condena por falsedad documental en el contexto de una operativa de sustracción de carburante en la que se utilizaban documentos para franquear controles y dotar de apariencia lícita a movimientos inexistentes. El interés doctrinal se sitúa en precisar cuándo no estamos ante una mera “alteración” de una fotocopia o un soporte carente de virtualidad, sino ante la creación de un documento falso con apariencia auténtica y eficacia en el tráfico interno de la entidad.

El Tribunal rechaza la tesis defensiva de que la conducta debía degradarse por partir de una fotocopia. Conforme al hecho probado, no se trató de manipular un documento ya existente, sino de un proceso de fotocomposición que dio lugar a un albarán “*ex novo*” íntegramente mendaz, construido con formato y distintivos corporativos para simular una operación que nunca tuvo lugar. En términos de subsunción, la Sala reconduce la conducta a la falsedad por simulación, destacando que lo relevante es la creación de un documento que aparenta ser auténtico y es idóneo para inducir a error a terceros en los controles, lo que integra el dolo falsario.

Con ello, el Tribunal consolida un criterio práctico: cuando el sujeto no se limita a alterar un soporte de menor valor probatorio, sino que confecciona un documento nuevo que reproduce signos externos de autenticidad para superar filtros o generar una apariencia de legalidad, la falsedad se aprecia con plenitud, sin que la referencia a la “fotocopia” neutralice la tipicidad. La sentencia refuerza así la idea de que la clave no es el soporte de partida, sino la simulación documental final y su aptitud para operar como instrumento de engaño en el circuito de control al que se dirige.

---

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA (Gran Sala), de 4 de septiembre de 2025 en el asunto: C-305/22

- **Asunto:** *Orden de detención europea y ejecución de condena*

El TJUE aborda un supuesto en el que el Estado de ejecución deniega la entrega en virtud del art. 4.6 de la Decisión Marco 2002/584 (nacional / residente y compromiso de ejecutar la pena), y al mismo tiempo pretende reconocer y ejecutar la sentencia de condena en su territorio. La cuestión es si ese “compromiso de ejecutar” puede desplegarse al margen del mecanismo de la

Finally, the Court provided two relevant practical rules in the application of Article 324 of the Law of Criminal Procedure. The first is that the investigator can carry out actions aimed at determining whether what appears subsequently is a mere consequence of what has already been investigated or a true extension of the matter under investigation. Secondly, when the investigation is objectively extended, or a new defendant is added, the time limit must be calculated in such a way that there are no undue delays, allowing for the necessary time for the investigation.

---

SUPREME COURT JUDGMENT No. 3748/2025, of 30 July

- **Reporting Judge:** *The Honourable Ms Ana María Ferrer García*
- **Subject matter:** *Document forgery*

The Second Chamber upheld, among other judgments, a conviction for document forgery in the context of a fuel theft operation in which documents were used to bypass controls and give the appearance of legitimacy to non-existent movements. The doctrinal interest lies in determining when a case involves not merely the “alteration” of a photocopy or a non-virtual medium, but rather the creation of a false document with an authentic appearance and effectiveness in the internal operations of the entity.

The Court rejected the defence’s argument that the offence should be downgraded because it was based on a photocopy. According to the proven facts, it was not a case of manipulating an existing document, but rather a process of typesetting that resulted in a completely false “*ex novo*” delivery note, created with a corporate format and distinctive features to simulate a transaction that never took place. In terms of legal classification, the Court classified the conduct as falsification by simulation, emphasising that what is relevant is the creation of a document that appears to be authentic and is capable of misleading third parties during checks, which constitutes fraudulent intent.

In doing so, the Court established a practical criterion: when an accused does not merely alter a document of lesser probative value, but instead creates a new document that reproduces external signs of authenticity in order to bypass filters or create an appearance of legality, the falsification is fully recognised, without the reference to the “photocopy” neutralising the criminal nature of the act. Therefore, the judgment reinforces the idea that the key is not the initial support, but the final documentary simulation and its ability to function as an instrument of deception in the verification process for which it is intended.

---

JUDGMENT OF THE COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN UNION (Grand Chamber), of 4 September 2025 in Case C-305/22

- **Subject matter:** *European Arrest Warrant and execution of sentence*

The CJEU considered a case in which an executing State refused surrender under Article 4(6) of Framework Decision 2002/584 (national/resident and undertaking to execute the sentence), while at the same time seeking to recognise and enforce the conviction in its territory. The question at issue was whether this “undertaking to execute” could be implemented

Decisión Marco 2008/909 sobre reconocimiento y ejecución de sentencias.

La Gran Sala fija un criterio claro: cuando la autoridad de ejecución quiere aplicar el art. 4.6 y asumir la ejecución de la condena, debe atenerse a los requisitos y al procedimiento de la Decisión Marco 2008/909, por aplicación del art. 25 de esta última. En particular, la asunción de la ejecución exige el consentimiento del Estado de emisión, que se materializa a través de la transmisión de la sentencia y del certificado previsto en el art. 4 de la Decisión Marco 2008/909.

El TJUE subraya que no existen “dos regímenes” alternativos: permitir que el Estado de ejecución se aparte unilateralmente del sistema de la 2008/909 comprometería el funcionamiento de la Orden de Detención Europea (“ODE”), cuyo principio general es la ejecución (art. 1.2 de la Decisión Marco 2002/584), y convertiría la denegación en una vía de hecho para desplazar la competencia ejecutiva del Estado de emisión sin garantías ni control.

Desde esa premisa, la sentencia declara que, si el Estado de ejecución deniega la ODE sin respetar el procedimiento de la 2008/909 (y, por tanto, sin el consentimiento del Estado de emisión), el Estado de emisión conserva el derecho a ejecutar la pena y puede mantener la orden de detención europea. El art. 22.1 de la Decisión Marco 2008/909 (pérdida de competencia del Estado de emisión una vez iniciada la ejecución en el Estado de ejecución) no opera cuando esa “asunción” se ha producido fuera del marco y garantías de dicha Decisión Marco, precisamente para evitar riesgos de impunidad y elusión del sistema.

Por último, el Tribunal enfatiza el principio de cooperación leal: el diseño normativo exige un diálogo real entre autoridades judiciales de emisión y de ejecución (consultas, intercambio de información, uso completo de los instrumentos de ambas Decisiones Marco) para evitar bloqueos. La idea de fondo es que la reinserción social –objetivo del art. 4.6– es relevante, pero no desplaza ni vacía la regla estructural del reconocimiento mutuo: si no hay una asunción de ejecución válida conforme a la 2008/909, la ODE debe ejecutarse.

---

#### SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO 3907/2025, de 11 de septiembre

- **Ponente:** *Excmo. Sr. D. Eduardo de Porres Ortiz de Urbina*
- **Asunto:** *Calumnias e injurias con publicidad y libertad de expresión*

La Sala Segunda resuelve el recurso de casación interpuesto por el querellante contra la sentencia absolutoria dictada en apelación, tras haber sido inicialmente condenada la acusada por delitos continuados de calumnias e injurias con publicidad a raíz de múltiples manifestaciones dirigidas a organismos administrativos y publicaciones en redes sociales y blog, en las que atribuía al querellante conductas ilícitas y lo descalificaba con expresiones especialmente afrentosas. El debate casacional se centra en si esas imputaciones y expresiones superaban el umbral típico de los arts. 205 y 208 CP

outside the mechanism of Framework Decision 2008/909 on the recognition and enforcement of judgments.

The Grand Chamber established a clear criterion: when the executing authority wishes to apply Article 4(6) and assume the enforcement of the sentence, it must comply with the requirements and procedure of Article 25 of Framework Decision 2008/909. In particular, the execution of a sentence requires the consent of the issuing State, which is given through the transmission of the judgment and the certificate provided for in Article 4 of Framework Decision 2008/909.

The CJEU stressed that there are not “two alternative regimes”: allowing the executing State to unilaterally depart from the Framework Decision 2008/909 system would compromise the functioning of the European Arrest Warrant (“EAW”), the general principle of which is the execution (Article 1(2) of Framework Decision 2002/584), and would turn refusal into a de facto means of displacing the issuing State’s executive jurisdiction without guarantees or control.

On that basis, the judgment states that if an executing State refuses to execute an EAW without complying with the procedure laid down in Framework Decision 2008/909 (and therefore, without the consent of the issuing State), the issuing State retains the right to enforce the sentence and may maintain the European arrest warrant. Article 22(1) of Framework Decision 2008/909 (loss of jurisdiction of the issuing State once enforcement has begun in the executing State) does not apply when such “taking over” has taken place outside the framework and guarantees of the Framework Decision, precisely to avoid risks of impunity and circumvention of the system.

Finally, the Court emphasised the principle of loyal cooperation: the regulatory model requires a real dialogue between issuing and executing judicial authorities (consultations, the exchange of information, full use of the instruments of both Framework Decisions) in order to avoid deadlocks. The underlying principle is that social reintegration - the objective of Article 4(6) - is relevant, but it does not displace or nullify the structural rule of mutual recognition: if there is no valid assumption of enforcement under Framework Decision 2008/909, the EAW must be enforced.

---

#### SUPREME COURT JUDGMENT No. 3907/2025, of 11 September

- **Reporting Judge:** *The Honourable Mr Eduardo de Porres Ortiz de Urbina*
- **Subject matter:** *Defamation and libel with exposure to the public, and freedom of expression*

The Second Chamber ruled on an appeal filed by a plaintiff against an acquittal issued on appeal, after the defendant had initially been convicted of continued defamation and libel with exposure to the public as a result of multiple statements made to administrative bodies and publications on social media and blogs, in which she attributed illegal conduct to the plaintiff and disparaged him with particularly offensive expressions. In this case, the appeal focused on whether the statements and expressions in question exceeded the thresh-

o, por el contrario, quedaban amparadas por el art. 20 CE en un contexto de crítica y denuncia.

El Tribunal precisa, en primer lugar, que también en escritos dirigidos a órganos públicos pueden cometerse injurias o calumnias, por lo que no comparte la afirmación general de la sentencia de apelación que lo excluía salvo denuncia falsa. Ahora bien, subraya que, para apreciar calumnia, la imputación debe ser concreta, terminante y referida a una persona identificable, atribuyendo hechos con perfil delictivo mínimamente determinado; quedan fuera las imputaciones genéricas o imprecisas. Aplicado al caso, entiende que las referencias contenidas en los escritos administrativos mezclan reproches a la actuación de distintas Administraciones con alusiones al querellante, pero sin la precisión fáctica exigible para integrar un delito de calumnias, sin perjuicio de que el contenido pueda tener encaje, en abstracto, en el ámbito de la injuria.

En cuanto a las injurias, la Sala asume el juicio de ponderación de la instancia de apelación: lo controvertido se inserta en un contexto de conflicto prolongado y de crítica a actuaciones públicas, con un componente de denuncia y debate de interés general, lo que obliga a interpretar con rigor los límites al art. 20 CE y a evitar un efecto disuasorio del Derecho penal sobre la crítica. Aunque reconoce que pudo existir exceso expresivo, concluye que la valoración de conjunto no desborda de forma típica y antijurídica el marco de la libertad de expresión en las circunstancias del caso. En consecuencia, desestima el recurso y confirma la absolución, consolidando la idea de que la tipicidad de calumnias exige imputación delictiva precisa, y que en injurias el análisis ha de partir del contenido constitucional de la libertad de expresión y de su ponderación con el derecho al honor.

#### AUTO DEL TRIBUNAL SUPREMO 8588/2025, de 17 de septiembre

- **Ponente:** *Excmo. Sr. D. Antonio del Moral García*
- **Asunto:** *Incidente de nulidad (art. 241 LOPJ) por alegada defensa letrada ineficaz en casación*

El Tribunal Supremo resuelve un incidente de nulidad de actuaciones promovido frente a una sentencia firme de casación en la que se había desestimado el recurso del condenado. La pretensión se articula por vulneración del derecho a la asistencia letrada efectiva (art. 24.2 CE), sosteniendo que la defensa de oficio en casación fue deficitaria: solo formalizó uno de los motivos anunciados, utilizó un cauce técnicamente inadecuado (*error facti*) y no evacuó el trámite conferido para informar sobre la eventual incidencia de la LO 10/2022, de ahí que se solicitara que la Sala hubiera debido reaccionar de oficio, retro trayendo actuaciones y provocando una nueva designación letrada.

La Sala fija el estándar de control: los tribunales no están llamados a supervisar ordinariamente la estrategia y técnica defensiva, por respeto a la autonomía profesional y a la imparcialidad judicial. Solo cabe una intervención excepcional cuando exista un vacío defensivo patente o una ineficacia manifiesta capaz de comprometer el

hold established in Articles 205 and 208 of the Criminal Code or, on the contrary, were protected by Article 20 of the Spanish Constitution in the context of criticism and complaint.

The Court stated, firstly, that libel or defamation can also be committed in writings addressed to public bodies, and, therefore, did not agree with the general statement in the appeal judgment that such offences are excluded except in cases of false reporting. However, it stressed that, in order to be considered defamation, the accusation must be concrete, definite and refer to an identifiable person, attributing facts with a minimally determined criminal profile; generic or imprecise accusations are excluded. Applied to the case, the Court held that the references contained in the administrative documents mixed criticisms of the actions of various administrations with allusions to the complainant, but without the factual precision required to constitute a crime of defamation, without prejudice to the fact that the content could, in abstract terms, fall within the scope of libel.

Concerning libel, the Court accepted the assessment of the appeal court: the matter in dispute arose in a context of prolonged conflict and criticism of public actions, with an element of complaint and debate of general interest, which requires a rigorous interpretation of the limits of Article 20 of the Spanish Constitution and avoids a deterrent effect of criminal law on criticism. Although the Court acknowledged that there may have been excessive rhetoric, it concluded that, taken as a whole, the statements did not exceed the limits of freedom of expression in a typical and unlawful manner in the circumstances of the case. Consequently, it dismissed the appeal and upheld the acquittal, reinforcing the idea that the criminality of defamation requires a precise criminal charge, and that in cases of libel, the analysis must be based on the constitutional meaning of freedom of expression and its balance with the right to honour.

#### SUPREME COURT ORDER No. 8588/2025, of 17 September

- **Reporting Judge:** *The Honourable Mr Antonio del Moral García*
- **Subject matter:** *Application to set aside proceedings (Article 241 of the Organic Law of the Judiciary) on the grounds of an allegedly ineffective legal defence in an appeal*

The Supreme Court ruled on a motion to set aside proceedings brought against a final appeal judgment in which the convicted person's appeal was dismissed. The claim was based on a breach of the right to effective legal representation (Article 24.2 of the Spanish Constitution), on the grounds that the court-appointed counsel in the appeal was incompetent: they only formalised one of the grounds put forward, used a technically inappropriate approach (a mistake as to the facts) and did not complete the procedure for reporting on the possible impact of Organic Law 10/2022, hence the argument that the Court should have reacted *ex officio*, remitting the proceedings to the lower court and appointing new legal counsel.

The Court established the standard for reviewing appeals: courts are not required to routinely supervise defence strategy and technique, out of respect for professional autonomy and judicial impartiality. Intervention is only possible in exceptional cases where there is a clear defensive shortcoming or manifest ineffec-

núcleo del proceso justo. El Auto desarrolla la doctrina interna y su conexión con el TEDH, insistiendo en que el juicio de ineficacia debe hacerse con cautelas (evitando una revisión “ex post” por el mero fracaso del recurso) y exige, además, una carga argumental: identificar déficits concretos y sostener un pronóstico mínimamente consistente de que esa deficiencia pudo influir de forma relevante en el fallo. En consecuencia, desestima el incidente de nulidad, subrayando que el art. 241 LOPJ no puede convertirse en una vía para reabrir oportunidades mediante una “segunda casación” mejor construida bajo el pretexto de una defensa imperfecta.

---

#### SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO 4223/2025, de 25 de septiembre

- **Ponente:** *Excmo. Sr. D. Andrés Palomo del Arco*
- **Asunto:** *Responsabilidad penal de la persona jurídica (art. 31 bis CP) y prohibición de responsabilidad por arrastre y exigencia de acreditar un defecto de organización o falta de control*

La Sala Segunda resuelve el recurso de casación interpuesto por la mercantil condenada y por su administradora única por un delito continuado de estafa agravada. Mientras confirma la condena de la persona física (por concurrencia de engaño bastante y dolo preexistente), el Tribunal centra el análisis en la condena impuesta también a la persona jurídica, sancionada con multa y prohibición de actividades, y advierte que el juicio de imputación corporativa exige un tratamiento autónomo y específico.

El Tribunal vuelve a recordar que el sistema español no es vicarial: la responsabilidad penal de la persona jurídica no deriva “por arrastre” del delito cometido por el directivo, sino que se fundamenta en un hecho propio, normalmente expresado como defecto de organización o quiebra del “debido control”. La sentencia reitera la doctrina consolidada desde el Pleno (STS 154/2016) y posteriores: no cabe responsabilidad objetiva ni presunción *iuris tantum* de defecto organizativo por el mero hecho de conexión. La presunción de inocencia impone a la acusación probar, además del delito de la persona física, la concurrencia del “delito corporativo” (incumplimiento grave de deberes de supervisión / vigilancia).

Aplicando ese estándar, la Sala estima el recurso solo respecto de la mercantil: del *factum* (y de la motivación) no resulta ningún dato mínimamente concreto sobre estructura de control, fallos en modelos de gestión o ausencia / ineficacia de mecanismos de prevención que permitan subsumir su participación punible en el art. 31 bis CP. El hecho probado se limita a afirmar que la administradora actuó en beneficio de la entidad y que era su accionista mayoritaria / administradora, lo que el Tribunal considera insuficiente para condenar a la persona jurídica.

tiveness that could compromise the essence of a fair trial. The Order sets out the applicable doctrine and its connection with the ECHR, stressing that the assessment of ineffectiveness must be made with caution (avoiding an “ex post” review merely because the appeal has failed) and also requires a burden of proof: identifying specific shortcomings and maintaining a minimally consistent prognosis that this deficiency could have had a significant influence on the judgment. Consequently, the Court rejected the application to set aside proceedings, stressing that Article 241 of the Organic Law of the Judiciary cannot be used to reopen opportunities through a better-constructed “second appeal” under the pretext of an imperfect defence.

---

#### SUPREME COURT JUDGMENT No. 4223/2025, of 25 September

- **Reporting Judge:** *The Honourable Mr Andrés Palomo del Arco*
- **Subject matter:** *Criminal liability of a legal person (Article 31 bis of the Criminal Code) and the prohibition against derivative liability and the requirement to demonstrate an organisational defect or lack of control*

The Second Chamber ruled on an appeal brought by a convicted company and its sole director for a continuing offence of aggravated fraud. While upholding the conviction of the natural person (due to the presence of sufficient deception and pre-existing fraud), the Court focused its analysis on the conviction also imposed on the legal person, which was punished with a fine and was prohibited from carrying out activities, and warned that the corporate prosecution required an independent and specific approach.

The Court again noted that the Spanish system is not derivative: the criminal liability of a legal person does not arise “by extension” from the offence committed by its director, but is based on an act of its own, normally expressed as an organisational defect or a breach of “due control”. The judgment reiterates the consolidated doctrine from the Plenary (SC) No. 154/2016) and subsequent judgments: there is no strict liability or presumption *iuris tantum* of an organisational defect merely on the basis of a connection. The presumption of innocence requires the prosecution to prove, in addition to the offence committed by the natural person, the existence of a “corporate offence” (serious breach of supervision/oversight).

In applying this standard, the Court upheld the appeal only with regard to the company: the facts (and the grounds) did not provide any concrete information about the control structure, failures in management models, or the absence/ineffectiveness of prevention mechanisms that would allow its participation to be classified as criminally punishable under Article 31 bis of the Criminal Code. The proven facts were limited to stating that the director acted in the interests of the company and that she was its majority shareholder/director, which the Court considered insufficient to convict the legal entity.

## SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO 4531/2025, de 15 de octubre

- **Ponente:** *Excmo. Sr. D. Vicente Magro Servet*
- **Asunto:** *Prevaricación en contratación pública y revelación/uso de información reservada*

La Sala Segunda resuelve los recursos contra una condena por un esquema de contratación pública en el que, según los hechos probados, la adjudicación de un contrato relevante quedó condicionada por una preparación previa del expediente orientada a favorecer a un licitador concreto. La sentencia destaca la existencia de contactos y trabajos preparatorios anteriores a la licitación, así como la utilización de información y criterios que después se incorporaron a los pliegos, generando una ventaja competitiva indebida.

En lo esencial, el Tribunal Supremo refuerza la idea de que la prevaricación administrativa (art. 404 CP) no sanciona cualquier ilegalidad en contratación, sino la arbitrariedad cualificada: resoluciones injustas, dictadas con apartamiento consciente de las reglas esenciales del procedimiento y sin justificación razonable. El elemento “a sabiendas” puede inferirse de la propia entidad y acumulación de irregularidades cuando éstas evidencian que el procedimiento se utilizó como mera cobertura formal de una decisión predeterminada.

Además, la sentencia confirma la relevancia penal de la revelación o facilitación de información reservada ligada al expediente (arts. 417 y 418 CP), subrayando que el “grave daño” no se limita al perjuicio económico, sino que incluye la afectación intensa al interés público y a la igualdad en la licitación. En ese marco, también admite la responsabilidad de quienes, sin ser autoridad o funcionario, contribuyen de forma decisiva a la adjudicación irregular (inducción o cooperación), y destaca la conexión funcional entre la revelación y la prevaricación cuando aquella actúa como medio para asegurar el resultado del procedimiento.

## SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO 4526/2025, de 16 de octubre

- **Ponente:** *Excmo. Sra. D.ª Ana María Ferrer García*
- **Asunto:** *Asunto: Validez probatoria de comunicaciones EncroChat incorporadas vía Orden Europea de Investigación (“OEI”)*

La Sala Segunda resuelve varios recursos de casación contra una sentencia dictada en la Audiencia Nacional en un procedimiento de delincuencia organizada, con un cuadro fáctico apoyado en vigilancias, seguimientos, intervenciones telefónicas, registros y aprehensiones, en el marco de una estructura dedicada al tráfico ilícito con reparto de roles (depósitos, logística, coordinación, etc.).

El núcleo del debate en casación se centra, por un lado, en la regularidad de las intervenciones de comunicaciones acordadas durante la investigación (incluida la queja por la demora inicial vinculada al estado de alarma) y, por otro, en el valor probatorio de las conversaciones obtenidas de la plataforma EncroChat, recibidas en España a través de una Orden Europea de Investigación y después incorporadas a la causa.

En cuanto a EncroChat, la sentencia hace un encuadre general: se trata de un sistema de comunicación cifrada utilizado de forma prevalente por organizaciones criminales, cuya intervención se articuló

## SUPREME COURT JUDGMENT No. 4531/2025, of 15 October

- **Reporting Judge:** *The Honourable Mr Vicente Magro Servet*
- **Subject matter:** *Administrative misconduct in public procurement and the disclosure/use of classified information*

The Second Chamber ruled on appeals against a conviction arising from a public procurement scheme in which, according to the proven facts, the award of a large contract was made conditional on prior preparation of the file intended to favour a specific bidder. The judgment noted the existence of contacts and preparatory work prior to the tender, as well as the use of information and criteria that were subsequently incorporated into the tender documents, creating an undue competitive advantage.

Essentially, the Supreme Court reinforced the idea that administrative misconduct (Article 404 of the Criminal Code) does not punish any illegality in procurement, but instead punishes qualified arbitrariness: unfair decisions, made with conscious disregard for the essential rules of procedure and without reasonable justification. The element of “knowingly” could be inferred from the very nature and accumulation of irregularities when they showed that the procedure was used as a mere pretext for a predetermined decision.

Furthermore, the judgment confirms the criminal significance of the disclosure or provision of classified information linked to the case file (Articles 417 and 418 of the Criminal Code), stressing that the “serious harm” is not limited to economic damage, but includes serious harm to the public interest and equality in the tender process. In this context, it also acknowledges the liability of those who, without being an authority or official, contribute decisively to an irregular award (inducement or cooperation), and highlights the functional connection between disclosure and administrative misconduct when the former acts as a means of ensuring the outcome of the procedure.

## SUPREME COURT JUDGMENT No. 4526/2025, of 16 October

- **Reporting Judge:** *The Honourable Ms Ana María Ferrer García*
- **Subject matter:** *Probative value of EncroChat communications obtained via a European Investigation Order (“EIO”)*

In this case, the Second Chamber ruled on several appeals against a judgment issued by the National High Court in organised crime proceedings, with a set of facts based on surveillance, monitoring, phone tapping, searches and arrests, within the framework of a structure dedicated to illicit trafficking with a division of roles (warehouses, logistics, and coordination, among others).

The main focus of the appeal concerned, firstly, the legality of the wiretaps that were approved during the investigation (including the complaint about the initial delay linked to the state of emergency) and, secondly, the probative value of the conversations obtained from the EncroChat platform, which were received in Spain through a European Investigation Order and then included in the case.

Regarding EncroChat, the judgment provides a general overview: it is an encrypted communication system used predominantly by criminal organisations, whose interception was initially organised

inicialmente en Francia con autorización judicial, mediante una técnica que permitió la captación masiva de mensajes y su posterior canalización a otros Estados, entre ellos España, tras la tramitación de la correspondiente cooperación judicial. Sobre esa base, el Tribunal aborda las quejas de “prospectividad” y de falta de autorización judicial en España, examinando el itinerario de obtención y transmisión del material y su encaje con las garantías del proceso.

Otro punto especialmente litigioso es el proceso de atribución de identidades a los usuarios (asignación de un “*nickname*” o perfil a una persona concreta) y la necesidad de que ese enlace no descanse en inferencias débiles. La Sala, precisamente por la potencia incriminatoria de este tipo de fuente digital, enfatiza la exigencia de una integración probatoria sólida: identificación técnicamente sustentada y corroboración con elementos externos (actuaciones policiales, hallazgos objetivos y demás diligencias practicadas en la causa), para disipar dudas sobre autoría y autenticidad.

Finalmente, el Tribunal avala la respuesta dada por la instancia y la apelación tanto sobre el control judicial de las intervenciones acordadas –incluida la apreciación de que la demora en autorizar la medida, en el contexto excepcional del COVID-19, no desactiva por sí sola la consistencia de los indicios ni la proporcionalidad de la injerencia– como sobre la incorporación del material EncroChat por los cauces de cooperación utilizados.

#### SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO 4357/2025, de 14 de octubre

- **Ponente:** *Excmo. Sr. D. Andrés Martínez Arrieta*
- **Asunto:** *Responsabilidad penal de la persona jurídica (art. 31 bis CP) en alzamiento de bienes*

La Sala Segunda analiza un supuesto en el que, junto a las personas físicas, fue condenada también una persona jurídica por alzamiento de bienes. El Tribunal parte de una constatación determinante: el relato de hechos probados describe la conducta de los administradores (venta del único bien libre de cargas para frustrar el cobro de un crédito), pero no contiene ningún hecho propio atribuible a la entidad que permita construir el juicio de imputación corporativa exigido por el art. 31 bis CP.

La sentencia aprovecha para recordar, con apoyo en su jurisprudencia de Pleno (STS 154/2016) y posteriores, que el modelo español no admite heterorresponsabilidad: la persona jurídica no responde penalmente por arrastre del delito cometido por sus directivos. El núcleo del reproche corporativo es el llamado “delito corporativo”: un defecto estructural de organización y control (incumplimiento grave de deberes de supervisión, vigilancia y control) que haga posible o facilite la comisión del delito en el seno de la organización, y cuya concurrencia debe ser objeto de debate, prueba y declaración fáctica, sin presunciones automáticas.

Aplicando ese estándar, el Tribunal estima el recurso de la persona jurídica y dicta segunda sentencia absolutoria respecto de ella: al no existir en el *factum* ninguna referencia a fallos de control, ausencia de cultura de cumplimiento o mecanismos de pre-

in France with judicial authorisation, using a technique that permitted the mass collection of messages and their subsequent channelling to other States, including Spain, after the corresponding judicial cooperation had been processed. On this basis, the Court addressed the arguments concerning the exploratory nature of the investigation and lack of judicial authorisation in Spain, examining the route by which the material was obtained and transmitted and its compatibility with the guarantees of due process.

Another particularly contentious point was the process of attributing identities to users (assigning a nickname or profile to a particular person) and the necessity that this link not rest on weak inferences. Precisely because of the incriminating power of this type of digital evidence, the Court emphasised the need for the solid integration of evidence: technically supported identification and corroboration with external elements (police investigations, objective findings, and other proceedings carried out in the case) to dispel doubts about authorship and authenticity.

Finally, the Court endorsed the response given by the lower court and the appeal both on the judicial review of the authorised wiretaps – including the assessment that the delay in authorising the measure, in the exceptional context of COVID-19, did not in itself invalidate the consistency of the evidence or the proportionality of the wiretap – and on the incorporation of the EncroChat material through the channels of cooperation used.

#### SUPREME COURT JUDGMENT No. 4357/2025, of 14 October

- **Reporting Judge:** *The Honourable Mr Andrés Martínez Arrieta*
- **Subject matter:** *Criminal liability of legal persons (Article 31 bis of the Criminal Code) in fraudulent insolvency*

The Second Chamber analysed a case in which, alongside the natural persons involved, a legal person was also convicted of fraudulent insolvency. The court proceeded from a decisive finding: the statement of proven facts described the conduct of the directors (the sale of the only unencumbered asset in order to frustrate the recovery of a debt) but contained no act attributable to the entity itself that would permit the finding of corporate criminal liability required by Article 31 bis of the Criminal Code to be constructed.

The judgment took the opportunity to note, with reference to its plenary case law (SCJ No. 154/2016) and subsequent judgments, that the Spanish model does not admit derivative corporate liability: a legal person is not criminally liable for an offence committed by its directors. The core of corporate criminal liability is what is termed the “corporate offence”: a structural defect in organisation and control (a serious failure of duties of supervision, oversight and control) that makes possible or facilitates the commission of an offence within the organisation, and the existence of which must be the subject of adversarial argument, proof and a finding of fact, without automatic presumptions.

Applying that standard, the Court allowed the legal person’s appeal and delivered a second judgment acquitting it: as the statement of facts contained no reference to failures of control, absence of a compliance culture or prevention mechanisms, nor to

vención, ni a elementos típicos adicionales que permitan afirmar un hecho propio corporativo, la condena resulta inviable en sede casacional. Se mantienen, sin embargo, las condenas de las personas físicas, confirmando así un criterio práctico claro: sin hechos probados específicos sobre el defecto organizativo y la imputación propia, no cabe condena penal de la persona jurídica.

#### SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO 5041/2025, de 11 de noviembre

- **Ponente:** *Excma. Sra. D.ª Ana María Ferrer García*
- **Asunto:** *Dónde termina la libertad de expresión y empieza el delito de odio*

La Sala Segunda resuelve un recurso de casación dirigido contra el auto de la Audiencia Provincial que acordó el archivo de unas actuaciones incoadas por presunta incitación al odio del art. 510.1 a) CP, a raíz de expresiones emitidas en un programa radiofónico en septiembre de 2021, en el contexto del debate social sobre la vacunación. El juzgado instructor había apreciado indicios respecto de uno de los intervinientes y acordó la prosecución por procedimiento abreviado. La Audiencia Provincial revocó y decretó el sobreseimiento, y el querellante pretende en casación que existía base suficiente para continuar el procedimiento.

El Tribunal Supremo recuerda que el art. 510 CP sanciona discursos que promueven o incitan al odio/hostilidad contra un grupo definido por alguno de los vectores típicos del precepto, configurándose como delito de peligro, pero exige que el riesgo sea real y medible en términos de “clima social” y de afectación potencial al proyecto de vida en libertad y seguridad del colectivo. La sentencia subraya, además, que la interpretación debe ser restrictiva, conectada con el núcleo de protección de colectivos históricamente vulnerables, y no basta con el lenguaje duro u ofensivo si no incorpora una auténtica incitación a violencia o discriminación en los términos típicos.

Aplicando esa metodología (contexto, capacidad de influencia, fuerza del lenguaje, reiteración, medio de difusión y condiciones de los destinatarios), la Sala concluye que las expresiones examinadas, aunque excesivas y de terminología hostil, se insertan en un debate público particularmente crispado y no alcanzan el umbral de lesividad exigido por el art. 510.1 a) CP: no aprecia una incitación penalmente relevante a la violencia o a la discriminación contra quienes optaron por no vacunarse, ni una idoneidad objetiva para activar el tipo en su dimensión antidiscriminatoria. En consecuencia, desestima el recurso y confirma el archivo, reforzando una línea jurisprudencial de contención: el Derecho penal no puede operar como respuesta automática frente a excesos verbales cuando faltan los elementos estructurales del “discurso del odio” típico.

additional elements of the offence that would permit an act attributable to the corporate entity itself to be established, the conviction was unsustainable at the appeal stage. The convictions of the natural persons were, however, upheld, thereby confirming a clear practical principle: without specific proven facts concerning the organisational defect and the attribution of an act to the legal person itself, a criminal conviction of the legal person is not possible.

#### SUPREME COURT JUDGMENT No. 5041/2025, of 11 November

- **Reporting Judge:** *The Honourable Ms Ana María Ferrer García*
- **Subject matter:** *Where freedom of expression ends and the offence of hate speech begins*

The Second Chamber resolved a cassation appeal brought against an order of the Court of Appeal that ordered the archiving of proceedings initiated for alleged incitement to hatred under Article 510.1 a) of the Criminal Code, arising from remarks made on a radio programme in September 2021 in the context of the public debate on vaccination. The investigating judge had found sufficient circumstantial evidence in respect of one of the participants and ordered that the case proceed by way of abbreviated proceedings. The Court of Appeal reversed that judgment and ordered the discontinuance of proceedings, and on appeal, the complainant sought to establish that there had been a sufficient basis to continue the proceedings.

The Supreme Court noted that Article 510 of the Criminal Code punishes speech that promotes or incites hatred or hostility towards a group defined by one of the protected characteristics set out in the provision, and is configured as an offence of endangerment; however, it requires that the risk be real and measurable in terms of the “social climate” and of the potential impact on the ability of the group to live their lives in freedom and security. The judgment further underlined that interpretation must be restrictive, connected to the core of protection of historically vulnerable groups, and that harsh or offensive language does not suffice if it does not incorporate a genuine incitement to violence or discrimination within the terms of the offence.

Applying that methodology (context, capacity for influence, force of language, repetition, medium of dissemination and the characteristics of the recipients) the Chamber concluded that the expressions examined, although excessive and involving hostile language, were part of a particularly fraught public debate and did not reach the threshold of harmfulness required by Article 510.1 a) of the Criminal Code: it found no criminally significant incitement to violence or discrimination against those who chose not to be vaccinated, nor any objective capacity to trigger the offence in its anti-discrimination dimension. Accordingly, the Chamber dismissed the appeal and confirmed the archiving of proceedings, reinforcing a jurisprudential line of restraint: criminal law cannot operate as an automatic response to verbal excess where the structural elements of the typical “hate speech” offence are absent.

## SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO 969/2025, de 21 de noviembre

- **Ponente:** *Excmo. Sr. D. Julián Sánchez Melgar*
- **Asunto:** *Prescripción en delitos leves por paralización del recurso de apelación*

El Tribunal Supremo estima un recurso de casación por infracción de ley interpuesto contra una condena por delito leve de hurto en grado de tentativa. El motivo se centra en la prescripción por paralización de la causa en segunda instancia: tras dictarse sentencia en octubre de 2020 y formalizarse recurso de apelación pocos días después, el procedimiento permaneció sin impulso hasta su admisión a trámite casi dos años más tarde, sin que conste resolución interruptora con contenido sustancial.

El Tribunal recuerda su doctrina: la prescripción puede apreciarse de oficio en cualquier estado del procedimiento cuando resulte clara, al ser una institución de derecho material vinculada a la seguridad jurídica (art. 9.3 CE) y a la innecesariedad de la pena como instrumento de prevención. Solo interrumpen la prescripción las resoluciones con contenido real de impulso procesal que evidencien que el procedimiento “*se dirija contra*” el culpable (art. 132 CP). No bastan providencias o actuaciones meramente formales destinadas a aparentar actividad.

Aplicando estos criterios, la Sala declara la prescripción al constatar un lapso de paralización superior a un año en la tramitación del recurso de apelación, suficiente para la prescripción del delito leve conforme al art. 131.1 CP. Además, precisa que la prescripción opera también en la segunda instancia –la ley no distingue– y que no puede perjudicar al acusado que hubiera solicitado activación del recurso sin conseguirla. En consecuencia, casa y anula la sentencia en lo que afecta a la recurrente y dicta segunda sentencia absoluta por extinción de la responsabilidad penal.

## SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO 5365/2025, de 9 de diciembre

- **Ponente:** *Excmo. Sr. D. Andrés Martínez Arrieta*
- **Asunto:** *Revelación de datos reservados (art. 417.1 CP) y alcance del deber de reserva en actuaciones del Ministerio Fiscal*

La Sala Segunda resuelve una causa especial seguida por presunta divulgación de información reservada obtenida en el ejercicio del cargo público, vinculada a un intercambio de comunicaciones sobre una propuesta de conformidad en un procedimiento de naturaleza tributaria en el marco de un procedimiento penal. El debate se centra en si la transmisión de ese contenido a terceros constituía “*revelación de datos reservados*” y en qué medida la difusión mediática posterior o el interés público del asunto pueden neutralizar el deber de reserva inherente a la función.

La Sala analiza el caso desde la lógica del art. 417.1 CP como delito especial de infracción de deber, exigiendo los siguientes tres elementos: (i) el sujeto activo debe ser una autoridad / funcionario, (ii) se lleva a cabo una revelación (poner en conocimiento

## SUPREME COURT JUDGMENT No. 969/2025, of 21 November

- **Reporting Judge:** *The Honourable Mr Julián Sánchez Melgar*
- **Subject matter:** *Prescription of minor offences due to the stalling of appeal proceedings*

The Supreme Court upheld an appeal on procedural grounds filed against a conviction for a minor offence of attempted theft. The grounds for the appeal were based on the limitation period that arose due to the staying of the proceedings during the appeal phase: following the delivery of the judgment in October 2020 and the filing of the appeal a few days later, the proceedings remained dormant until the appeal was admitted for consideration almost two years later, with no record of any interrupting substantive decision.

The Court recalled its established doctrine: prescription may be assessed ex officio at any stage of the proceedings where it is clear, as it is an institution of substantive law linked to legal certainty (Article 9.3 of the Spanish Constitution) and to the absence of any need for punishment as an instrument of prevention. Only judgments with real substantive content demonstrating procedural impetus — evidencing that the proceedings are “directed against” the accused (Article 132 of the Criminal Code) — interrupt the limitation period. Case management orders or purely formal acts designed to give the appearance of activity do not suffice.

Applying these criteria, the Chamber held that the proceedings were time-barred upon finding a period of inactivity in excess of one year in the processing of the appeal, sufficient for the prescription of the minor offence under Article 131.1 of the Criminal Code. The Chamber further clarified that prescription operates at second instance as well — the law draws no distinction — and that it cannot operate to the detriment of an accused who had sought to have the appeal progressed without success. Accordingly, the Chamber set aside and annulled the judgment in so far as it affected the appellant and delivered a second judgment acquitting the accused due to the extinguishment of criminal liability.

## SUPREME COURT JUDGMENT No. 5365/2025, of 9 December

- **Reporting Judge:** *The Honourable Mr Andrés Martínez Arrieta*
- **Subject matter:** *Disclosure of confidential information (Article 417.1 of the Criminal Code) and the scope of the duty of confidentiality in proceedings involving the Public Prosecution Service*

The Second Chamber ruled on a special appeal concerning the alleged disclosure of confidential information obtained in the course of public office, linked to an exchange of communications regarding a plea agreement in tax proceedings within the context of criminal proceedings. The dispute centred on whether the disclosure of this information to third parties constituted a “*disclosure of confidential information*” and to what extent subsequent media coverage or the public interest in the matter could override the duty of confidentiality inherent in the role.

The Chamber analysed the case through the framework of Article 417.1 of the Criminal Code as a special offence of breach of duty, requiring the following three elements: (i) the offender must be an authority or public official; (ii) a disclosure must take place

de tercero no legitimado) y (iii) que lo revelado sea secreto o información que no deba ser divulgada, conocida por razón del cargo. La sentencia subraya el carácter alternativo del objeto típico (“*secretos o informaciones*”), de modo que la punibilidad no se agota en lo estrictamente secreto: basta con la comunicación de información reservada, relevante para la preservación de garantías del afectado.

Desde esa premisa, la Sala precisa qué debe entenderse por ‘información que no deba ser divulgada’. No se trata solo de datos formalmente secretos, sino de información que, por su naturaleza y por el contexto en que se conoce (por razón del cargo), está sujeta a reserva para proteger garantías del investigado. En el caso, aunque el correo no fuera “secreto” en sentido estricto, se califica como información reservada porque reflejaba una disposición a conformarse: su difusión podía perjudicar la posición procesal del afectado y comprometer su derecho de defensa si finalmente no se alcanzaba el acuerdo.

El razonamiento se apoya en la función de la conformidad: la confidencialidad no es una simple práctica, sino un deber de reserva exigible en ese tipo de negociaciones. La sentencia lo conecta con su finalidad garantista: si el acuerdo no llega a cerrarse, la información asociada a la posible conformidad no debe proyectarse hacia el exterior, porque puede generar estigmatización y, sobre todo, condicionar el ejercicio del derecho de defensa. Por eso, la reserva opera también en fases iniciales, cuando el intercambio aún es preliminar.

También es relevante la respuesta a la alegación de que la información ya circulaba. El Tribunal afirma que la difusión previa por terceros no neutraliza el tipo: el deber de sigilo del funcionario no desaparece porque el dato haya sido publicado. Al contrario, si la información se conoce por razón del cargo, la comunicación posterior puede tener un plus de lesividad, especialmente cuando supone confirmar o dar apariencia de oficialidad a lo que antes era una filtración.

Por último, la sentencia descarta que se trate de una mera infracción disciplinaria. Sitúa la antijuridicidad en un plano material: la difusión es penalmente relevante por su capacidad de afectar a derechos del afectado y al correcto funcionamiento institucional. En esa línea, precisa que el deber de información pública no es ilimitado: debe ejercerse dentro de los límites que imponen la reserva legal y la protección de derechos, de modo que no puede invocarse como justificación cuando la comunicación pública compromete esas garantías.

(the bringing to the knowledge of an unauthorised third party); and (iii) what is disclosed must be secret or information that ought not to be divulged, known by reason of the office held. The judgment underlines the alternative nature of the subject matter of the offence (“*secrets or information*”), such that criminal liability is not exhausted by what is strictly secret: it suffices for there to be a communication of confidential information that is relevant to the preservation of the guarantees of the person affected.

Proceeding from that premise, the Chamber set out what is to be understood by “information that ought not to be divulged”. The provision covers not only formally secret data, but also information which, by its nature and by the context in which it comes to be known (by reason of the office held), is subject to a duty of confidentiality for the purpose of protecting the guarantees of the person under investigation. In the case at hand, although the email was not “secret” in the strict sense, it was characterised as confidential information because it reflected a willingness to enter into a plea agreement: its disclosure could have prejudiced the procedural position of the person affected and compromised their right to a defence if the agreement was ultimately not reached.

The Court’s reasoning was grounded in the function of the plea agreement: confidentiality is not a mere practice but a duty of confidentiality that is enforceable in that type of negotiation. The judgment connected this with its rights-protective purpose: if an agreement is ultimately not concluded, the information associated with the possible plea agreement must not be disclosed externally, because it may give rise to stigmatisation and, above all, compromise the exercise of the right to a defence. For that reason, the duty of confidentiality operates even in the initial stages, when the exchange is still at a preliminary stage.

Also significant is the Court’s response to the argument that the information was already in circulation. The Court held that prior disclosure by third parties does not neutralise the offence: the duty of confidentiality incumbent on the official does not disappear because the information has been made public. On the contrary, where the information came to be known by reason of the office held, a subsequent communication may carry a heightened capacity for harm, particularly where it amounts to confirming or lending an appearance of official authority to what was previously merely a leak.

Finally, the judgment rejected the argument that the conduct amounted to no more than a disciplinary infraction. The judgment placed the unlawfulness on a substantive level: the disclosure was criminally significant by reason of its capacity to affect the rights of the person concerned and the proper institutional functioning of the relevant bodies. In the same vein, the judgment made clear that the duty of public information is not unlimited: it must be exercised within the limits imposed by legal confidentiality obligations and the protection of rights, and, accordingly, cannot be invoked as a justification where public communication compromises those guarantees.

## SENTENCIA DE LA AUDIENCIA NACIONAL 5625/2025, de 19 de diciembre

- **Ponente:** *Ilma. Sra. D.ª María Fernanda García Pérez*
- **Asunto:** *Responsabilidad penal de la persona jurídica (art. 31 bis CP) y prueba pericial del programa de compliance*

La Sala Segunda aborda la imputación a la persona jurídica desde el planteamiento predominante consistente en que la responsabilidad corporativa no se construye por arrastre del hecho del directivo, pero tampoco se excluye por la mera existencia formal de políticas internas. El análisis pivota sobre si, en el caso concreto, existía un modelo de organización y gestión idóneo y eficaz para prevenir / detectar el riesgo típico materializado (corrupción en contratación y pagos instrumentales) y si el delito fue posible por un déficit de control atribuible a la estructura corporativa.

La sentencia contrasta el diseño del sistema alegado (código, funciones éticas, formación, canal, procedimientos) con su funcionamiento real en las áreas de riesgo. La Sala razona que la eficacia no se acredita con “mera documentación”, sino con evidencias de implantación operativa: controles materiales en los departamentos relevantes en la comisión del delito, trazabilidad del servicio, supervisión con capacidad de freno y reacción ante indicadores anómalos. En esa verificación práctica, concluye que la operativa irregular pudo desplegarse de forma sostenida sin barreras internas suficientes, lo que revela un incumplimiento relevante de los deberes de vigilancia y control exigibles a la entidad.

Donde la sentencia ofrece un rendimiento especialmente útil es en la valoración de la pericial de *compliance*. La Sala examina la pericia aportada por la defensa y le atribuye un alcance limitado por su enfoque predominantemente sobre el programa en sí, pero no sobre el caso: aprecia que no permite un juicio robusto sobre la efectividad del modelo frente a los hechos concretos, por carecer de anclaje suficiente en aspectos operativos determinantes (cómo funcionaban realmente los controles, qué contrapesos existían, qué alertas debieron activarse, y cuál era la autonomía real de las funciones de auditoría/supervisión). La consecuencia procesal es clara: la pericia no logra neutralizar el juicio de ineficacia que resulta del contraste con el resto del material probatorio y con la propia dinámica acreditada de los hechos.

Con ese sustrato, la Sala declara la responsabilidad penal de la persona jurídica por los delitos apreciados en su seno, al entender acreditado el déficit estructural de control relevante a efectos del art. 31 bis CP, e impone las correspondientes penas de multa. Al mismo tiempo, delimita el alcance de la imputación corporativa absolviendo en aquellos extremos en los que no encuentra base fáctica suficiente. En términos prácticos, la sentencia fija una pauta relevante en cuanto al marco procesal: el *compliance* exculpatorio no se “declara”, se prueba, y la pericial que pretende acreditarlo debe descender a los circuitos reales, su autonomía, su trazabilidad y su capacidad efectiva de detectar y detener el patrón de riesgo que finalmente se materializa.

## NATIONAL HIGH COURT JUDGMENT No. 5625/2025, of 19 December

- **Reporting Judge:** *The Honourable Ms María Fernanda García Pérez*
- **Subject matter:** *Criminal liability of legal persons (Article 31 bis of the Criminal Code) and expert evidence of compliance programmes*

The Second Chamber addressed the attribution of liability to a legal person from the prevailing approach, which holds that corporate liability is not constructed by imputation from the act of the director, but nor is it excluded by the mere formal existence of internal policies. The analysis turned on whether, in the specific case, there existed an organisational and management model that was suitable and effective for preventing and detecting the typical risk that materialised (corruption in contracting and instrumental payments), and whether the offence was made possible by a control deficit attributable to the corporate structure.

The judgment contrasted the design of the compliance system relied upon (code of conduct, ethics functions, training, reporting channel, procedures) with its actual operation in the risk areas. The Chamber reasoned that effectiveness is not demonstrated by “mere documentation”, but by evidence of operational implementation: material controls in the departments relevant to the commission of the offence, traceability of the service, and supervision with the capacity to halt and respond to anomalous indicators. In that practical assessment, the Chamber concluded that the irregular operation was able to unfold in a sustained manner without sufficient internal barriers, which revealed a material breach of the duties of supervision and control required of the entity.

Where the judgment proves particularly useful is in its assessment of the compliance expert evidence. The Chamber examined the expert evidence adduced by the defence and attributed to it a limited scope on account of its focus being predominantly on the programme itself rather than on the case: it found that the evidence did not permit a robust assessment of the effectiveness of the model in relation to the specific facts, as it lacked sufficient grounding in determinative operational aspects (how the controls actually functioned, what counterweights existed, what alerts ought to have been triggered, and what the real autonomy of the audit and supervisory functions was). The procedural consequence is clear: the expert evidence failed to neutralise the finding of ineffectiveness that resulted from the contrast with the remainder of the evidential material and with the proven factual pattern.

On that basis, the Chamber declared the criminal liability of the legal person for the offences found to have been committed within it, having found the structural control deficit required for the purposes of Article 31 bis of the Criminal Code to be established, and imposed the corresponding fines. At the same time, the Chamber defined the scope of the corporate attribution of liability, acquitting on those counts in respect of which it found an insufficient factual basis. In practical terms, the judgment establishes an important standard as regards the procedural framework: exculpatory compliance is not “declared”. It must be proved, and expert evidence seeking to establish it must descend to the level of the actual processes, their autonomy,

## SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO 6061/2025, de 22 de diciembre

- **Ponente:** *Excmo. Sr. D. Pablo Llarena Conde*
- **Asunto:** *Acceso a expedientes del CNI y reglas probatorias*

El Tribunal Supremo aborda la pretensión defensiva de incorporar al proceso penal (vía desclasificación) los expedientes de seguridad tramitados por el CNI y niega que su mera conexión fáctica con la *notitia criminis* obligue a su aportación. La Sala parte de una distinción estructural: la investigación de inteligencia no se orienta a la averiguación de un hecho punible ni a la obtención de prueba de cargo, sino a proporcionar información para la seguridad del Estado bajo un régimen propio, incluido el control previo del magistrado competente cuando hay injerencias en derechos fundamentales. Por eso, los actos generados en ese marco “no son verdaderos actos de prueba” ni “diligencias de investigación” del proceso penal, y no se “transmutan” en actos procesales sometidos a los estándares ordinarios (publicidad, contradicción y régimen probatorio general) por el solo hecho de existir un procedimiento penal posterior.

Desde esa premisa, el Tribunal justifica la denegación del acceso con apoyo en el régimen de información clasificada: las actividades del CNI (organización, medios, procedimientos, fuentes, etc.) constituyen información con grado de secreto conforme a la Ley 11/2002, Reguladora del Centro Nacional de Inteligencia, y las actuaciones autorizadas en el marco de la LO 2/2002 de 6 de mayo, reguladora del control judicial previo del Centro Nacional de Inteligencia, quedan sujetas a una reserva reforzada. Ahora bien, la Sala Segunda matiza que el secreto no opera como blindaje absoluto, ya que existe un cauce de desclasificación (radicado en el Gobierno) y su resultado puede estar sujeto a control jurisdiccional. Lo que se descarta es que la jurisdicción penal deba tratar el expediente de inteligencia como si fuera un material probatorio del proceso. En otras palabras, la información de inteligencia puede tener un interés preprocesal, pero se configura –en su caso– como objeto de prueba, no como prueba en sí misma.

Aplicando lo anterior al caso, la Sala considera que la denegación no vacía el derecho de defensa porque, de un lado, se llegó a desclasificar la resolución habilitante de la observación de conversaciones y, de otro, porque lo aportado por la investigación de inteligencia no fue base probatoria de la condena, sino un soporte para la elaboración de un atestado con valor de denuncia (art. 297 LECrim) que después hubo de corroborarse con prueba practicada en el procedimiento judicial con inmediatez y contradicción. En esa línea, también descarta la necesidad de una desclasificación más amplia o de identificar agentes del CNI cuando la solicitud solo buscaba abrir un frente sobre cadena de custodia sin un fundamento objetivo suficiente y con un coste especialmente intenso para el secreto operativo.

their traceability and their effective capacity to detect and halt the pattern of risk that ultimately materialised.

## SUPREME COURT JUDGMENT No. 6061/2025, of 22 December

- **Reporting Judge:** *The Honourable Mr Pablo Llarena Conde*
- **Subject matter:** *Access to CNI files and rules of evidence*

The Supreme Court addressed the defence submission seeking to introduce into the criminal proceedings (by way of declassification) the security files processed by Spain’s National Intelligence Centre (*Centro Nacional de Inteligencia*, “CNI”) and held that their mere factual connection to the criminal complaint did not compel their disclosure. The Court proceeded from a structural distinction: the intelligence investigation was not directed at establishing a criminal offence or obtaining evidence for the prosecution, but at providing information for the purposes of State security under a framework of their own, including prior judicial oversight by the competent judge where fundamental rights were interfered with. For that reason, the acts generated within that framework were “not true acts of proof” nor “investigative measures” within the criminal proceedings and were not “transmuted” into procedural acts subject to ordinary standards (of publicity, adversarial process and the general rules of evidence) by the mere fact that subsequent criminal proceedings existed.

Proceeding from that premise, the Court justified the refusal of access by reference to the framework governing classified information: the activities of the CNI (its organisation, means, procedures, sources, etc.) constitute information classified as secret under Law 11/2002 regulating the National Intelligence Centre, and the operations authorised under Organic Law 2/2002 of 6 May, regulating prior judicial oversight of the National Intelligence Centre, were subject to a heightened duty of confidentiality. However, the Second Chamber qualified this by noting that secrecy does not operate as an absolute shield, since a declassification procedure exists (vested in the Government) and its outcome could be subject to judicial review. What was rejected was any suggestion that the criminal courts were required to treat the intelligence file as though it were evidential material in the proceedings. In other words, intelligence information could be of pre-procedural interest but is characterised – if at all – as the object of proof, rather than as proof in itself.

Applying the foregoing to the case at hand, the Chamber considered that the refusal did not deprive the accused of the right to a defence because, on the one hand, the enabling authorisation for the interception of conversations had been declassified, and, on the other, because rather than the evidential basis for the conviction, the intelligence investigation contributed a foundation for the preparation of a police report with the status of a formal complaint under Article 297 of the LECrim, which subsequently had to be corroborated by evidence adduced in the judicial proceedings with immediacy and adversarial scrutiny. In the same vein, the Chamber also rejected the need for broader declassification or for the identification of CNI agents where the application had sought only to file a challenge on chain of custody grounds, without a sufficient objective basis and at a particularly heavy cost to operational secrecy.

## 4. Publicaciones de organismos oficiales

### Circular 2/2025 FGE sobre Audiencia Preliminar del Procedimiento Abreviado

La Circular encuadra la reforma de la LO 1/2025 como una modificación orientada a agilizar el proceso penal y, en ese marco, sistematiza el nuevo trámite de audiencia preliminar del procedimiento abreviado. Su finalidad es claramente práctica: preparar el juicio oral, depurar incidencias que antes se exponían al inicio del plenario (competencia, nulidades, suspensión, derechos fundamentales, prueba ilícita) y favorecer, cuando proceda, una terminación anticipada por conformidad.

En cuanto a la convocatoria, la Circular destaca que la audiencia preliminar es obligatoria para el órgano de enjuiciamiento, y debe ser el primer trámite una vez estén las actuaciones a su disposición, precisamente para evitar selecciones de asuntos que puedan generar dudas sobre imparcialidad. Se citará al Ministerio Fiscal, acusado y defensa, y se recalca que la ausencia del acusado o de alguna parte no suspende en general la audiencia si hubo citación correcta (salvo supuestos justificados), reforzando su carácter estructural y organizativo.

El punto más operativo es el objeto y su efecto preclusivo. La Circular recalca que en la audiencia preliminar deben articularse las alegaciones sobre competencia, vulneración de derechos fundamentales, artículos de previo pronunciamiento, causas de suspensión, nulidad de actuaciones y el debate sobre contenido/finalidad/nulidad de las pruebas. Superado ese momento, al inicio del juicio oral (art. 787.3 LECrim) se reduce el margen: básicamente, aquella incorporación documental y prueba “nueva” no conocida en la preliminar. La consecuencia práctica es clara: lo que no se plantee en la audiencia preliminar, salvo excepciones, queda tardío y puede cerrar vías de impugnación útiles.

En materia probatoria, la Circular distingue entre (i) la aportación de informes / certificaciones / documentos, permitida en la audiencia preliminar sin una restricción temporal tan rígida (aunque con lógica exigencia de justificación si es tardía o voluminosa), y (ii) la nueva proposición de prueba, que se condiciona a que no se conociera al formular los escritos. Subraya además que el órgano de enjuiciamiento resolverá normalmente en el acto y oralmente (o por Auto en 10 días si la cuestión es compleja), y que esas decisiones no son recurribles de inmediato, quedando como técnica procesal la protesta para reproducir la queja en el recurso contra la sentencia.

## 4. Publications by official bodies

### Circular 2/2025 of the State Attorney General's Office on the Preliminary Hearing in Abbreviated Criminal Proceedings

The Circular frames the reform introduced by Organic Law 1/2025 as an amendment aimed at streamlining criminal proceedings and, within that context, sets out a systematic account of the new preliminary hearing procedure in abbreviated criminal proceedings. Its purpose is clearly practical: to prepare the case for trial, to resolve procedural issues that were previously raised at the outset of the oral hearing (jurisdiction, nullities, adjournment, fundamental rights, unlawfully obtained evidence) and to facilitate, where appropriate, an early conclusion to the proceedings by way of agreement.

As regards the convening of the hearing, the Circular emphasises that the preliminary hearing is mandatory for the trial court and must be the first procedural step once the case file is at its disposal, precisely in order to avoid any selection of cases that might give rise to doubts as to impartiality. The public prosecutor, the accused and the defence will be summoned, and it is emphasised that the absence of the accused or of any party does not, as a general rule, suspend the hearing if proper notice was given (save in justified circumstances), reinforcing its structural and organisational character.

The most operationally significant aspect is its subject matter and its preclusive effect. The Circular emphasises that the preliminary hearing must be used to raise arguments concerning jurisdiction, violations of fundamental rights, preliminary pleas, grounds for adjournment, nullity of proceedings and the debate as to the content, purpose and admissibility of the evidence. Once that stage has passed, at the opening of the oral trial (Article 787.3 of the LECrim) the scope is narrowed: essentially limited to the introduction of documentary evidence and “new” evidence not known at the time of the preliminary hearing. The practical consequence is clear: anything not raised at the preliminary hearing, save in exceptional circumstances, will be out of time and may foreclose useful avenues of challenge.

On the question of evidence, the Circular draws a distinction between (i) the submission of reports, certificates and documents, which is permitted at the preliminary hearing without such a rigid time restriction (though with a reasonable requirement of justification where the submission is late or the material is voluminous), and (ii) the fresh proposal of evidence, which is conditional on that evidence not having been known at the time of filing the written submissions. The Circular further underlines that the trial court will normally rule at the hearing itself and orally (or by reasoned order within 10 days where the matter is complex), and that those judgments are not immediately appealable, with the formal objection on the record remaining as the procedural technique by which a party preserves its complaint for the purposes of an appeal against the judgment.

Finalmente, la Circular dedica un bloque central a la conformidad (ahora con un papel reforzado en la audiencia preliminar), sistematizando momentos procesales y novedades de la LO 1/2025 (incluida la supresión del antiguo límite penológico y el refuerzo de garantías informativas). También desarrolla la audiencia a la víctima antes de ciertas conformidades (y sus parámetros), y ofrece pautas internas, como es documentar la audiencia preliminar en la Fiscalía (incluyendo ofrecimientos de acuerdo) para asegurar coherencia de actuaciones y evitar “renegociaciones” injustificadas al inicio del plenario. En síntesis, la Circular traslada un mensaje claro de práctica, consistente que la audiencia preliminar se convierte en el centro de gravedad del procedimiento abreviado para depurar cuestiones previas, ordenar la prueba y, cuando sea viable, cerrar el procedimiento con conformidad.

Finally, the Circular devotes a central section to the plea agreement (which now plays an enhanced role at the preliminary hearing stage), mapping out the procedural stages and the key changes introduced by Organic Law 1/2025 (including the abolition of the former sentencing cap and the strengthening of informational safeguards for the accused). The Circular also addresses the requirement to hear the victim before certain plea agreements are approved (and the parameters governing that process), and offers internal guidance — such as the requirement for the prosecution to document the preliminary hearing (including any offers of agreement) so as to ensure consistency of conduct and avoid unjustified “renegotiation” at the opening of the oral trial. In summary, the Circular conveys a clear and consistent practical message: the preliminary hearing becomes the centre of gravity of the abbreviated criminal proceedings, serving to resolve preliminary matters, organise the evidence and, where viable, bring the proceedings to a close by way of an agreement.

## 5. Conocimiento Jurídico

### 5.1 Notas jurídicas enviadas a cliente

02/04/2025

**Anteproyecto de Ley Orgánica para tipificar como delito la infracción de medidas restrictivas de la UE**

Jorge Walser Boserman

19/08/2025

**Entrada en funcionamiento de la Autoridad Independiente de Protección del Informante**

Guillermo Meilán y Miriam Abajo

05/03/2025

**La Unión Europea aprueba el 16º paquete de medidas restrictivas contra Rusia**

Jorge Walser Boserman y Marina Cantos-Figuerola

24/07/2025

**La Unión Europea adopta el 18º paquete de medidas restrictivas contra Rusia**

Jorge Walser Boserman

30/10/2025

**19.º paquete de medidas restrictivas de la Unión Europea contra Rusia y Bielorrusia**

Jorge Walser Boserman

10/10/2025

**Próximo inicio del plazo de dos meses para notificar a la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I. los responsables del Sistema Interno de Información.**

Guillermo Meilán y Miriam Abajo

### 5.2 Artículos Doctrinales

17/09/2025 Diario La Ley

**Sanciones internacionales y derecho penal español: un examen del anteproyecto de transposición de la Directiva (UE) 2024/1226**

Jorge Walser Boserman

01/08/2025 Cinco Días

**Bruselas se impacienta: España aún no ha penalizado la elusión de medidas restrictivas**

Jorge Walser Boserman

23/07/2025 Cinco Días

**Rearme y contrabando cuando exportar se convierte en un delito**

Guillermo Meilán y Mario H. Maldonado

## 5. Legal Knowledge

### 5.1 Legal Briefings sent to clients

02/04/2025

**Preliminary Draft Organic Law criminalising the violation of EU restrictive measures**

Jorge Walser Boserman

19/08/2025

**Entry into force of the Independent Authority for the Protection of Whistleblowers**

Guillermo Meilán and Miriam Abajo

05/03/2025

**The European Union approves the 16th package of restrictive measures against Russia**

Jorge Walser Boserman and Marina Cantos-Figuerola

24/07/2025

**The European Union adopts the 18th package of restrictive measures against Russia**

Jorge Walser Boserman

30/10/2025

**19th EU restrictive measures package against Russia and Belarus**

Jorge Walser Boserman

10/10/2025

**Upcoming start of the two-month period for notifying the Independent Authority for the Protection of Whistleblowers (A.A.I.) of those responsible for the Internal Information System**

Guillermo Meilán and Miriam Abajo

### 5.2 Academic Articles

17/09/2025 Diario La Ley

**International sanctions and Spanish criminal law: an examination of the draft legislation transposing Directive (EU) 2024/1226**

Jorge Walser Boserman

01/08/2025 Cinco Días

**Brussels is losing patience: Spain has not yet criminalised the circumvention of restrictive measures**

Jorge Walser Boserman

23/07/2025 Cinco Días

**Rearmament and smuggling: when exporting becomes a criminal offence**

Guillermo Meilán and Mario H. Maldonado

10/06/2025 Expansión

**‘Whistleblowing’: nos cuesta despegar**

Guillermo Meilán

30/05/2025 Actualidad Jurídica Aranzadi

**Aranceles: ¿un nuevo impulso al delito de contrabando en España?**

Guillermo Meilán

### 5.3 Menciones en Prensa

07/10/2025 El Confidencial

**Cónclave de abogados VIP para desenmarañar el caso Montoro**

Adriana de Buerba

18/06/2025 Global Investigations Review

**Women in Investigations 2025**

Adriana de Buerba

16/05/2025 Le Courrier d’Espagne

**Communiqué de presse Mujeres Avenir**

Adriana de Buerba

### 5.4 Actividad docente

#### Universidad Pontificia de Comillas

Juan Palomino ha colaborado impartiendo la asignatura delitos contra la propiedad intelectual a través de Internet en el Máster Universitario en Propiedad Intelectual.

#### ISDE

Juan Palomino ha colaborado impartiendo la asignatura “Obligaciones de los abogados en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales”.

Juan Palomino también ha participado en el Máster de acceso a la abogacía impartiendo la asignatura de “Prevención de Blanqueo de Capitales”.

#### Universidad Complutense de Madrid

Adriana de Buerba y Miriam Abajo impartieron (junto con Clara Jiménez y Marta Núñez, socias ambas del Departamento de Derecho Fiscal de Pérez-Llorca) la conferencia “*El delito fiscal*” en la Escuela de Práctica Jurídica de la UCM.

Adriana de Buerba impartió la conferencia “*El fraude de carrusel 2.0 y la Fiscalía Europea*” en la Escuela de Práctica Jurídica de la UCM.

#### Universidad Carlos III de Madrid

Guillermo Meilán ha participado impartiendo clases en el Master de Derecho de las Telecomunicaciones.

10/06/2025 Expansión

**‘Whistleblowing’: we are struggling to get off the ground**

Guillermo Meilán

30/05/2025 Actualidad Jurídica Aranzadi

**Tariffs: a new impetus for the offence of smuggling in Spain?**

Guillermo Meilán

### 5.3 In the Press

07/10/2025 El Confidencial

**Conclave of top-flight lawyers to unpick the Montoro case**

Adriana de Buerba

18/06/2025 Global Investigations Review

**Women in Investigations 2025**

Adriana de Buerba

16/05/2025 Le Courrier d’Espagne

**Mujeres Avenir press release**

Adriana de Buerba

### 5.4 Academic Activities

#### Universidad Pontificia Comillas

Juan Palomino taught the subject “Crimes against Intellectual Property through the Internet” for the Master’s Degree in Intellectual Property.

#### ISDE

Juan Palomino taught the subject “Lawyers’ Obligations in the Prevention of Money Laundering”.

Juan Palomino has also participated in the Master’s Degree for Access to the Legal Profession, teaching the subject of “Prevention of Money Laundering”.

#### Universidad Complutense de Madrid

Adriana de Buerba and Miriam Abajo delivered (together with Clara Jiménez and Marta Núñez, both partners in the Tax practice at Pérez-Llorca) the lecture “*The tax offence*” at the UCM School of Legal Practice.

Adriana de Buerba also delivered the lecture “*Carousel fraud 2.0 and the European Public Prosecutor’s Office*” at the UCM School of Legal Practice.

#### Universidad Carlos III de Madrid

Guillermo Meilán taught classes for the Master’s Degree in Telecommunications Law.

**URJC**

Mario H. Maldonado ha colaborado con la URJC impartiendo clases en el Máster de Derecho Penal Económico.

**5.5 Eventos**

25 - 26/01/2025

**ERA Presidium meeting in Bruselas**

Asistencia de Adriana de Buerba

**URJC**

Mario H. Maldonado has collaborated with the URJC by teaching on the Master's Degree in White Collar Crime Law.

**5.5 Events**

25 - 26/01/2025

**ERA Presidium meeting in Brussels**

Attendance by Adriana de Buerba



29/01/2025

**Club Español de la Litigación de los Negocios – La Fiscalía Europea (EPPO) y su encaje en el ordenamiento penal español**

Participación de Juan Palomino como ponente.

12 - 17/05/2025

**27th Annual Transnational Crime Conference, International Bar Association (IBA), Santiago de Chile**

Asistencia de Adriana de Buerba y Juan Palomino.

Adriana de Buerba actuó como co-chair de la conferencia y participó como ponente, dando las palabras de bienvenida. Asimismo, forma parte del Advisory Board del Criminal Law Committee de la IBA.

Juan Palomino participó como speaker en uno de los paneles del programa. Además, es Corporate Counsel Forum Liaison Officer del Business Crime Committee de la IBA.

27/05/2025

**Evento Mujeres Avenir – Presentación del libro de Julia Sevilla Merino, “Olympe de Gouges”**

Asistencia de Adriana de Buerba.

29/01/2025

**Spanish Business Litigation Club - The European Public Prosecutor's Office (EPPO) and its place within the Spanish criminal law framework**

Participation by Juan Palomino as a speaker.

12 - 17/05/2025

**27th Annual Transnational Crime Conference, International Bar Association (IBA), Santiago, Chile**

Attendance by Adriana de Buerba and Juan Palomino.

Adriana de Buerba acted as co-chair of the conference and participated as a speaker, delivering the welcome address. She is also a member of the Advisory Board of the IBA's Criminal Law Committee.

Juan Palomino participated as a speaker on one of the panels in the programme. He is also Corporate Counsel Forum Liaison Officer of the IBA's Business Crime Committee.

27/05/2025

**Mujeres Avenir Event - Presentation of the book by Julia Sevilla Merino, “Olympe de Gouges”**

Attendance by Adriana de Buerba.

12 - 14/06/2025

**Next EFCL Annual Conference, París**

Asistencia de Adriana de Buerba

12 - 14/06/2025

**Next EFCL Annual Conference, Paris**

Attendance by Adriana de Buerba

19 - 20/09/2025

**ECBA Autumn Conference, Belgrado European Criminal Bar Association Autumn Conference**

Asistencia y panelista en mesa redonda sobre Sanciones internacionales y elusión de medidas restrictivas.

19 - 20/09/2025

**ECBA Autumn Conference, Belgrade European Criminal Bar Association Autumn Conference 19-20 September 2025 - Belgrade, Serbia**

Attendance and participation as a panellist on a round table on international sanctions and the circumvention of restrictive measures.

16 - 17/10/2025

**Schellenberg Wittmer White-Collar Crime Symposium for Young Practitioners, Ginebra**

Asistencia de Jorge Walser Boserman

16 - 17/10/2025

**16-17 October 2025 | Schellenberg Wittmer White-Collar Crime Symposium for Young Practitioners, Geneva**

Attendance by Jorge Walser Boserman



21/10/2025

**Co-hosted Pharma Event con TozziniFreire, Barcelona**Participación de Cristina Duch (*welcome speech*), Juan Palomino y Natalia Olmos como ponentes.

21/10/2025

**Co-hosted Pharma Event with TozziniFreire, Barcelona**Participation by Cristina Duch (*welcome speech*), Juan Palomino and Natalia Olmos as speakers.

27/10/2025

**Jornada de Cumplimiento – Charla experta Sanciones Internacionales**

Participación de Juan Palomino y Jorge Walser como ponentes.

27/10/2025

**Compliance Conference - Expert talk on international sanctions**

Participation by Juan Palomino and Jorge Walser as speakers.

## 6. Reconocimientos

### 6.1 Despacho

#### Chambers & Partners Europe 2025

- » Dispute Resolution: Corporate Crime - **Band 2**

#### Legal 500 EMEA 2025

- » White Collar Crime - **Tier 2**

### 6.2 Abogados

#### Chambers & Partners Europe 2025

- » Dispute Resolution: Corporate Crime: Adriana de Buerba - **Band 1**
- » Corporate Compliance: Adriana de Buerba - **Band 1**

#### Legal 500 EMEA 2025

- » Adriana de Buerba - Leading Partner
- » Juan Palomino - Leading Partner

#### Best Lawyers 2026

- » Adriana de Buerba - Criminal Defense, Arbitration and Mediation, Corporate Governance and Compliance Practice
- » Juan Palomino - Criminal Defense, Corporate Governance and Compliance Practice
- » Guillermo Meilán - Criminal Defense
- » Jorge Walser Boserman - Criminal Defense

## 6. Recognition

### 6.1 The Firm

#### Chambers & Partners Europe 2025

- » Dispute Resolution: Corporate Crime - **Band 2**

#### Legal 500 EMEA 2025

- » White Collar Crime - **Tier 2**

### 6.2 Lawyers

#### Chambers & Partners Europe 2025

- » Dispute Resolution: Corporate Crime: Adriana de Buerba - **Band 1**
- » Corporate Compliance: Adriana de Buerba - **Band 1**

#### Legal 500 EMEA 2025

- » Adriana de Buerba - Leading Partner
- » Juan Palomino - Leading Partner

#### Best Lawyers 2026

- » Adriana de Buerba - (Criminal Defense, Arbitration and Mediation, Corporate Governance and Compliance Practice)
- » Juan Palomino - (Criminal Defense, Corporate Governance and Compliance Practice)
- » Guillermo Meilán - (Criminal Defense)
- » Jorge Walser Boserman - (Criminal Defense)

## 7. Nuestro equipo

El equipo de Derecho Penal Económico e Investigaciones Internas de Pérez-Llorca está integrado por abogados con una sólida especialización en la litigación penal y una experiencia transversal en entornos regulatorios complejos. Prestamos un asesoramiento cercano y adaptado a cada cliente, combinando una visión estratégica del procedimiento con un análisis técnico de los riesgos penales y reputacionales. Con el apoyo del resto de áreas del Despacho, ofrecemos soluciones coordinadas y eficientes, tanto en escenarios preventivos como en situaciones contenciosas. Nuestro asesoramiento pone especial énfasis en las siguientes áreas:

- » **Procedimientos penales por delitos económicos:** el equipo cuenta con una amplia experiencia en la dirección y defensa de procedimientos penales de alta complejidad, especialmente aquellos con componente transnacional o con múltiples intervinientes, relativos a delitos societarios, fraude fiscal, administración desleal, estafas complejas, corrupción entre particulares, insolvencias punibles y blanqueo de capitales, incluyendo supuestos con potencial imputación de la persona jurídica. Asimismo, intervenimos de forma habitual en macro causas, prestando asesoramiento desde las fases iniciales de la investigación y a lo largo de todo el procedimiento.
- » **Investigaciones internas:** asesoramos a organizaciones en el diseño y ejecución de investigaciones internas dirigidas a esclarecer hechos, evaluar exposición penal y adoptar medidas correctivas. Nuestra práctica abarca desde investigaciones reactivas (ante alertas internas, denuncias o incidentes relevantes) hasta revisiones preventivas focalizadas en áreas de riesgo. Coordinamos de forma habitual equipos multidisciplinares (forensic, tecnología, *compliance*, laboral) y trabajamos con despachos internacionales cuando la investigación afecta a varias jurisdicciones, incluyendo la gestión de evidencias digitales y el análisis de recursos informáticos corporativos con criterios de proporcionalidad y preservación de garantías.
- » **Corporate Compliance y asesoramiento en el marco de operaciones de M&A:** acompañamos a empresas nacionales e internacionales en la implantación, actualización y revisión de modelos de prevención de delitos y protocolos corporativos (canales internos, gestión de terceros, controles financieros, respuesta ante incidentes), con especial atención a la eficacia real del sistema y su trazabilidad. Igualmente, asesoramos en *due diligence* penal en operaciones de M&A, identificando riesgos, responsabilidades contingentes y medidas de mitigación, así como en la integración *post-transaction* de programas de *compliance* y marcos de investigación corporativa.
- » **Sanciones internacionales y Prevención de Blanqueo de Capitales:** el equipo asesora en materia de medidas restrictivas internacionales (UE y otros regímenes relevantes), incluyendo análisis de exposición, diseño de controles internos, investigación de potenciales incumplimientos y gestión de riesgos vinculados a terceros, operaciones y cadenas de sumi-

## 7. Our team

Pérez-Llorca's White Collar Crime and Internal Investigations team is made up of lawyers with extensive expertise in criminal litigation and cross-cutting experience in complex regulatory environments. Our approach is personal and tailored to each client, combining a strategic vision of the proceedings with a technical analysis of criminal and reputational risks. With the support of the firm's other practice areas, we offer coordinated and efficient solutions, both in preventive scenarios and in contentious situations. Our team's advice is particularly focused on the following areas:

- » **Criminal proceedings for economic offences:** Our team brings extensive experience to the management and defence of complex criminal cases, especially those with an international dimension or involving multiple parties. Our expertise spans corporate offences, tax fraud, mismanagement of entrusted assets (*administración desleal*), sophisticated fraud, private-sector corruption, criminal insolvency and money laundering, including scenarios involving the potential criminal liability of legal persons. We also regularly act in large-scale criminal cases, providing advice from the early stages of the investigation and throughout the entire proceedings.
- » **Internal investigations:** We advise organisations on designing and conducting internal investigations aimed at establishing the facts, assessing criminal exposure and taking corrective action. Our practice covers both reactive investigations (triggered by internal alerts, whistleblower reports or significant incidents) and preventive reviews focused on high-risk areas. We regularly coordinate multidisciplinary teams (forensic, technology, compliance and employment) and work alongside international firms where an investigation spans multiple jurisdictions, including the management of digital evidence and the analysis of corporate IT resources in accordance with principles of proportionality and with due regard for procedural safeguards.
- » **Corporate Compliance and advice within the framework of M&A transactions:** We support domestic and international companies in implementing, updating and reviewing criminal liability prevention models and corporate protocols (covering internal reporting channels, third-party management, financial controls and incident response) with a particular focus on the real-world effectiveness of the system and its traceability. We also advise on criminal law due diligence in M&A transactions, identifying risks, contingent liabilities and mitigation measures, as well as on the post-transaction integration of compliance programmes and corporate investigation frameworks.
- » **International Sanctions and Anti-Money Laundering:** The team advises on international restrictive measures across the EU and other relevant regimes, covering exposure analysis, the design of internal controls, investigation of potential non-compliance and the management of risks arising from third parties, transactions and supply chains.

nistro. Asimismo, prestamos apoyo en cumplimiento y defensa en el ámbito de la Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC/FT), incluyendo evaluación de riesgos, revisión de políticas y procedimientos, apoyo en inspecciones y actuaciones ante autoridades, y coordinación con investigaciones internas o procedimientos penales cuando exista posible derivación contenciosa.

We also assist with compliance and defence in the field of Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing (AML/CTF), encompassing risk assessment, policy and procedure reviews, support during regulatory inspections and engagement with authorities, and coordination with internal investigations or criminal proceedings where contentious exposure may arise.



**Adriana de Buerba**  
Socia/Partner

[adebuerba@perezllorca.com](mailto:adebuerba@perezllorca.com)  
T: +34 699 602 254



**Juan Palomino**  
Socio/Partner

[jpalomino@perezllorca.com](mailto:jpalomino@perezllorca.com)  
T: +34 628 192 754



**Jorge Walser**  
Asociado senior/Senior Associate

[jwalser@perezllorca.com](mailto:jwalser@perezllorca.com)  
T: +34 626 730 023



**Guillermo Meilán**  
Asociado senior/Senior Associate

[gmeilan@perezllorca.com](mailto:gmeilan@perezllorca.com)  
T: +34 686 061 041



**Mario Maldonado**  
Asociado senior/Senior Associate

[mmaldonado@perezllorca.com](mailto:mmaldonado@perezllorca.com)  
T: +34 690 633 392



**Miriam Abajo**  
Asociada/Associate

[mabajo@perezllorca.com](mailto:mabajo@perezllorca.com)  
T: +34 679 973 998



**Marina Cantos-Figuerola**  
Asociada/Associate

[mcantosfiguerola@perezllorca.com](mailto:mcantosfiguerola@perezllorca.com)  
T: +34 676 684 043



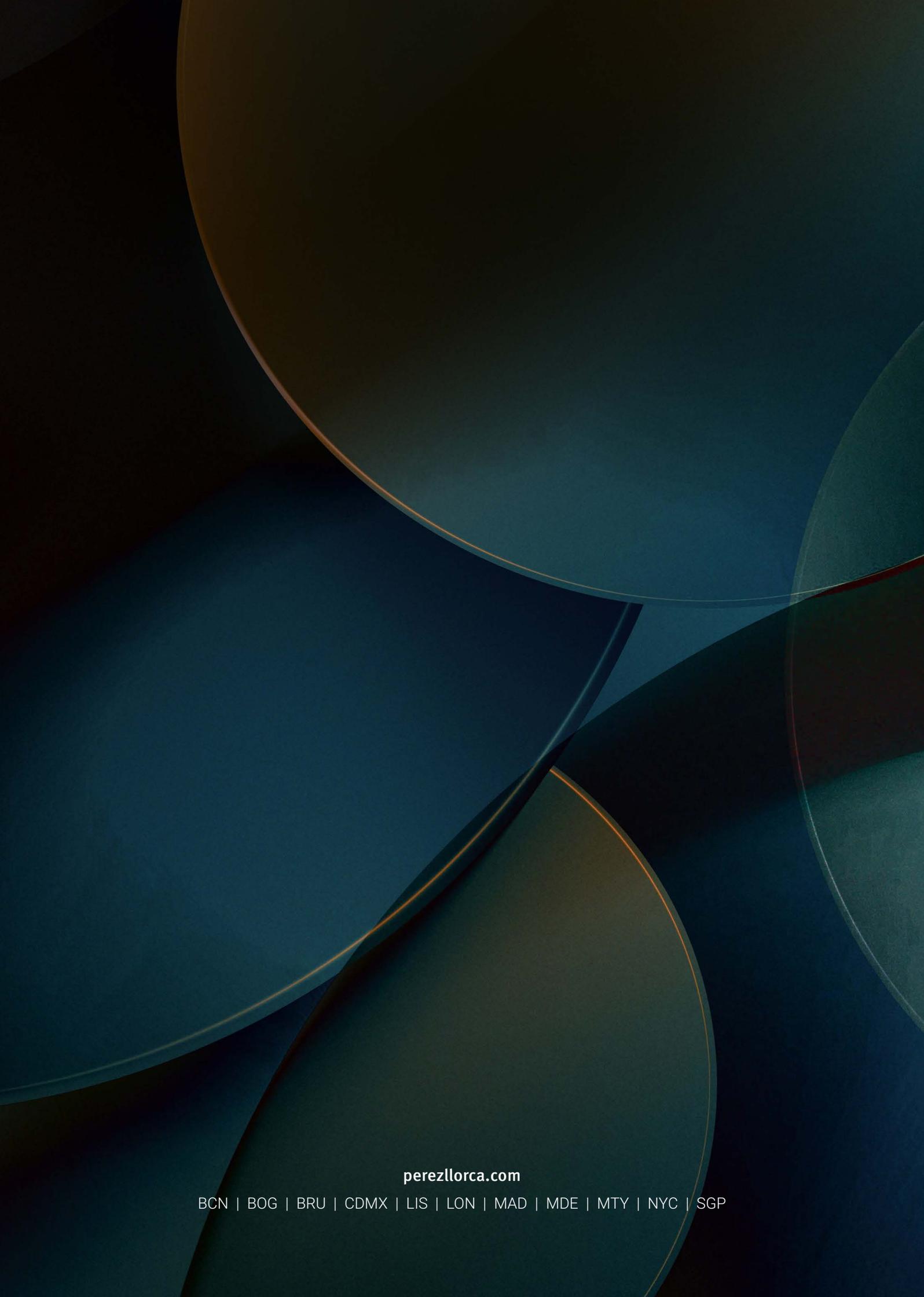
**Cristina Adalia**  
Asociada/Associate

[cadalia@perezllorca.com](mailto:cadalia@perezllorca.com)  
T: +34 609 125 353



**Carmen Ramos**  
Asesora jurídica/Legal Advisor

[carmen.ramos@perezllorca.com](mailto:carmen.ramos@perezllorca.com)  
T: +34 91 423 47 63



[perezllorca.com](http://perezllorca.com)

BCN | BOG | BRU | CDMX | LIS | LON | MAD | MDE | MTY | NYC | SGP